

CIRCUNSTANCIAS ACAECIDAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE TEIXEIRO



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

2018/2019

Autora: Vanessa Neira Castro
Tutor: Dr. Julio García Camiñas

ÍNDICE:

1. ABREVIATURAS.....	5
2.SUPUESTO DE HECHO.....	6
3. NOCIONES INTRODUCTORIAS DEL SUPUESTO DE HECHO.....	8
4. ¿Es correcta la clasificación penitenciaria de J.P.F. en segundo grado de tratamiento?.....	9
4.1. Introducción sobre la clasificación penitenciaria.....	9
4.2. Grados de tratamiento penitenciario.....	9
4.2.1. El segundo grado o régimen cerrado.....	10
4.2.2. El primer grado o régimen ordinario.....	10
4.2.3. El tercer grado o régimen abierto.....	13
4.2.5. El principio de flexibilidad del artículo 100.2 RP.....	13
4.3. <u>Conclusión</u>	14
5. ¿Deberían haberse adoptado, por parte de la Administración Penitenciaria, algún tipo de medidas de tratamiento para evitar nuevos intentos suicidas?.....	16
5.1. Introducción sobre el suicidio en prisión.....	16
5.2. El Programa Marco De Prevención de Suicidios.....	16
5.2.1. Objetivos del Programa.....	16
5.2.2. Factores de riesgo que conllevan la aplicación del Programa.....	17
5.2.3. Aspectos procedimentales.....	17
5.2.4. Medidas susceptibles de aplicación.....	18
5.3. <u>Conclusión</u>	19
6. ¿Tiene la Administración un deber legal de respetar la voluntad del interno relativa a la huelga de hambre?.....	22

6.1. Introducción.....	22
6.2. La relación de especial sujeción.....	22
6.3. Las STC 120/1990 y 137/1990.....	23
6.4. Regulación actual.....	25
6.5. <u>Conclusión</u>	25
7. ¿Qué calificación penal merecen los hechos que tuvieron lugar a las 8 de la tarde del día 13 de febrero?.....	27
7.1. Introducción.....	27
7.2. Calificación penal de los hechos en relación con S.M.R.....	27
7.3. Calificación penal de los hechos en relación con C.F.G.....	29
7.4. Calificación penal de los hechos en relación con el segundo funcionario.....	30
7.5. <u>Conclusión</u>	30
8. ¿Estos hechos pueden tener repercusión en la actual situación penitenciaria de J.P.F y S.M.R?.....	31
8.1. Repercusión de los hechos en la situación penitenciaria de J.P.F.....	31
8.2. Repercusión de los hechos en la situación penitenciaria de S.M.R.....	33
8.3. <u>Conclusión</u>	34
9. ¿Fue legalmente correcto el uso de la fuerza por parte de los funcionarios?.....	35
9.1. Los medios coercitivos.....	35
9.2. Clases de medios coercitivos.....	35
9.3. Requisitos para su uso.....	36
9.4. Aspectos procedimentales.....	36
9.5. <u>Conclusión</u>	37

10. ¿Se podría exigir algún tipo de responsabilidad a la Administración penitenciaria por el grave incidente regimental acontecido?.....	39
10.1. Introducción	39
10.2. Responsabilidad de la Administración por las lesiones de J.P.F. a S.M.R.....	40
10.3. Responsabilidad de la Administración por las lesiones de J.P.F a los funcionarios.....	41
10.4. Posible responsabilidad de la Administración por la no inclusión en el PPS	42
10.5. Posible responsabilidad de la Administración por la intervención de los funcionarios.....	43
11. <u>CONCLUSIONES FINALES</u>	45
12. BIBLIOGRAFIA.....	47
13. APÉNDICE JURISPRUDENCIAL.....	48
14. APÉNDICE LEGISLATIVO.....	49
15. ANEXOS.....	50

1. LISTADO DE ABREVIATURAS:

AAN	Auto de la Audiencia Nacional
AAP	Auto de la Audiencia Provincial
ART	Artículo
C.F.G.	Siglas de los funcionarios de prisiones que intervienen en los hechos.
CP	Código Penal
I	Instrucción
IIPP	Instituciones Penitenciarias
J.P.F.	Siglas del interno protagonista de los hechos
JVP	Juez de Vigilancia Penitenciaria
LOGP	Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria
PEAFA	Protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por Resolución de 8 de junio de 2017.
PPR	Prisión Permanente Revisable
PPS	Plan de Prevención de Suicidios
RP	Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario.
SAN	Sentencia de la Audiencia Nacional
S.M.R.	Siglas del compañero de celda de J.P.F
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TC	Tribunal Constitucional
TS	Tribunal Supremo

2. SUPUESTO DE HECHO

Los hechos tienen lugar el día 13 de febrero de 2019 en el Centro Penitenciario de Teixeiro, sito en Curtis, A Coruña. En este lugar se encuentra J.P.F., de 25 años de edad, cumpliendo condena en segundo grado de tratamiento por su autoría en un delito de asesinato con alevosía, ensañamiento y víctima especialmente vulnerable por razón de su edad y discapacidad.

Por el crimen descrito, un jurado popular lo declaró culpable y fue condenado a Prisión Permanente Revisable.

Se pone de manifiesto, con circunstancias casi diarias, su total inadaptación a la vida en prisión. Vulnera las normas regimentales con bastante asiduidad y, su conducta es muy violenta.

En diversas ocasiones se ha negado a cumplir las tareas de limpieza. Cuando ha sido recriminado verbalmente por los funcionarios por dicho motivo, el interno ha mostrado una actitud violenta, provocando diversos desperfectos materiales.

El recluso procede del centro penitenciario de Villabona (Asturias). En la citada prisión ya demostró, numerosas veces, su manifiesto incumplimiento de las normas regimentales, motivo por el que fue sancionado en reiteradas ocasiones.

J.P.F. ha protagonizado dos intentos de suicidio en la última semana. Según consta en los informes médicos, estas conductas suicidas no responden a una firme voluntad de acabar con su vida, tratándose más bien de simples intentos de llamar la atención. Dato que se corrobora con el hecho de que ha iniciado una huelga de hambre desde el día 10 de febrero de 2019.

Mantiene una actitud poco comunicativa, no suele pronunciar muchas palabras, pero cuando lo hace, suelen tener un mismo sentido: “Si nunca voy a salir de aquí, explíquenme ustedes de que me vale vivir”.

Comparte celda con S.M.R., que también se encuentra en segundo grado de tratamiento.

El día 13 de febrero de 2019, a las 19:59, cuando S.M.R. se disponía a volver a la celda que comparte con J.P.F., escuchó unos extraños ruidos que procedían de la misma. Al llegar vio como J.P.F. tenía anudado al cuello un cinturón, el cual había atado a los barrotes de una ventana situada en la parte superior de la celda, intentando con este método quitarse la vida.

A las 20:00, S.M.R. avisa por el interfono a los funcionarios: “Venid rápido que no puedo hacer ya nada más, mi compañero se va a matar porque tiene el cinturón por el cuello”.

En ese preciso momento, al darse cuenta J.P.F. de que su compañero había avisado, se enfada muchísimo y decide cesar en su intento de suicidio, pasando a hacer afirmaciones hacia su

compañero con frases tales que: “Como vuelvas a avisar, antes de quitarme la vida te llevo a ti por delante, poco te tiene que importar lo que haga o deje de hacer con mi vida”. Sin mediar palabra J.P.F. comienza a agredir a S.M.R. con tal grado de violencia que el segundo recluso es incapaz de defenderse para intentar repeler el ataque.

Con la mayor brevedad posible y dentro de sus posibilidades, los funcionarios de vigilancia C.F.G. y M.N.P., ambos en prácticas, acuden a la celda. En el momento del aviso, se encontraban atendiendo otro incidente similar tres celdas más adelante, por lo que tardaron 5 minutos.

Según consta en el parte de incidencias, redactado por los dos funcionarios, cuando llegaron a la celda “presenciaron como J.P.F. estaba agrediendo brutalmente a S.M.R., encontrándose el primer recluso totalmente fuera de control”. Dada la extrema violencia manifestada por J.P.F. y la ausencia de respuesta a las órdenes de que cesara en su actitud, los funcionarios deciden aplicar la fuerza física para reducirlo. Gracias a la acción de los funcionarios el interno S.M.R. puede salvarse de los golpes de J.P.F., no obstante J.P.F. continúa con su actitud violenta, ahora dirigida a los funcionarios. Los intentos por contener físicamente al recluso son infructuosos, por lo que S.M.R. decide auxiliar a los dos funcionarios.

Finalmente, entre los tres, logran controlar la situación y lo que pudo acabar con un desenlace fatal, terminó con que uno de los funcionarios, C.F.G., sufrió rotura del tabique nasal y una dislocación de hombro. Por su parte, el interno S.M.R. sufrió fractura del pómulo derecho y de tres costillas, así como numerosas escoriaciones y laceraciones en diversas partes del cuerpo.

3. NOCIONES INTRODUCTORIAS DEL SUPUESTO DE HECHO

Antes de contestar a las cuestiones planteadas y para lograr comprender con plenitud las preguntas desarrolladas a lo largo de este trabajo, es necesario contextualizar y hacer referencia, de forma breve, a algunas notas características e importantes mencionadas en el supuesto de hecho y sobre las cuales no se hace referencia en ninguna de las preguntas abordadas.

En primer lugar, el supuesto de hecho nos señala que el protagonista del mismo, J.P.F., está cumpliendo condena por haber cometido un delito (en concepto de autor) de asesinato con alevosía, ensañamiento y víctima especialmente vulnerable por razón de su edad y discapacidad.

Respecto al tipo delictivo cometido, cabe señalar que, en primer lugar concurre, no una, sino dos de las circunstancias que convierten un homicidio en asesinato (estas son las agravantes de alevosía y ensañamiento en virtud del artículo 139.1 Código Penal, en adelante CP).

Además de ello, también se nos dice que el delito se cometió frente a una víctima especialmente vulnerable por razón de su edad y discapacidad, lo cual hace que, al concurrir en el delito de asesinato esta circunstancia, el asesinato se califique de hipercualificado cuya pena será la prisión permanente revisable en virtud del artículo 140.1 CP¹.

Este, por tanto, es el motivo, por lo que J.P.F. se encuentra cumpliendo condena de prisión permanente revisable (en adelante PPR) en el Centro Penitenciario de Teixeiro.

A rasgos generales la PPR, introducida en nuestro ordenamiento mediante la reforma efectuada al CP en 2015, conlleva a la inclusión de la prisión perpetua en nuestro ordenamiento penal ya que, si bien es cierto resulta revisable bajo determinados presupuestos, su duración originaria abarcaría en principio toda la vida del penado. Esta condena se reserva para los tipos delictivos considerados mas graves, en los que se incluye, como ya expliqué con anterioridad, el delito al que fue condenado J.P.F.

Sin embargo, para que sea posible su revisión en este caso (lo cual no conllevaría necesariamente a su suspensión) J.P.F. deberá haber cumplido 25 años de condena, estar clasificado en tercer grado y contar con un informe favorable de reinserción social que el tribunal corroborará con posterioridad de acuerdo con los distintos informes remitidos por los profesionales de Instituciones Penitenciarias (en adelante IIPP). Por tanto, J.P.F. cumplirá de forma íntegra mínimo 25 años de prisión.

¹ 1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1.^a Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.

4. ¿Es correcta la clasificación penitenciaria de J.P.F. en segundo grado de tratamiento?

4.1. Introducción sobre la clasificación penitenciaria

El artículo 63 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (en adelante LOGP) establece que, tras una detallada observación del penado que ingresará en prisión, y para lograr una correcta individualización del tratamiento, se procederá a una clasificación del mismo para así destinarlo al establecimiento cuyo régimen sea más idóneo, previo análisis, no sólo su personalidad e historial individual, familiar, social y delictivo; sino también de las características de la pena impuesta (como la duración y medidas penales en su caso).

El artículo 72 del mismo cuerpo legal, establece y detalla esta clasificación penitenciaria y su separación en grados. Es, precisamente, este artículo, el que divide la pena de prisión en grados, a los que corresponden respectivamente determinados regímenes de vida y los cuales determinarán no sólo el eventual destino del interno a un determinado Centro Penitenciario, sino que también el régimen de salidas, actividades y permisos. Es por ello, por lo que cobra gran relevancia el análisis realizado al recluso con carácter previo por parte de distintos profesionales del Centro, ya que de éste dependerá su clasificación y, por ende, la calidad de vida en su estancia en prisión.

Al respecto, es importante mencionar que el sistema de individualización separado en grados no es definitivo, por lo que, pese a que la clasificación inicial es relevante, hay que destacar que es posible hacer tantas regresiones como progresiones en grado como se estime conveniente atendiendo a la evolución del interno/a en el tiempo que dure la condena (art. 65 LOGP).

Para responder a la cuestión referida a si es o no correcta la clasificación de este recluso en cuestión, es preciso, por tanto, explicar en que consiste cada uno de los grados que integran la clasificación penitenciaria en nuestros Centros Penitenciarios, y de esta forma valorar con criterio sobre su posible adecuación o no, y por ende, valorar si sería conveniente realizar o no una regresión o progresión en grado, o por lo contrario, lo adecuado sería mantenerlo en el grado penitenciario en el que se encuentra clasificado.

Además de la LOGP y el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario (en adelante RP), servirá de ayuda como criterio para la clasificación de los penados la I 9/2007, de clasificación y destino de los penados.

4.2. Grados de tratamiento penitenciario

Nuestro sistema de clasificación penitenciaria divide en distintos grados los regímenes de vida en prisión: el primer grado o régimen cerrado, el segundo grado también llamado régimen ordinario y, finalmente, un régimen de semilibertad o también llamado régimen abierto el cual configura el tercer grado de clasificación penitenciaria.

Si bien el artículo 72 LOGP establece como último de los grados la libertad condicional, lo cierto es que ésta, tras la reforma del Código Penal en el año 2015 cambió su naturaleza jurídica, configurándose en la actualidad ya no de forma estricta como la última fase de cumplimiento de la pena, sino como un período en el que la pena de prisión se encuentra suspendida²(todo ello en virtud del art. 90.1 CP³).

4.2.1. El segundo grado o régimen cerrado

Comenzaré explicando el régimen en el que se encuentra nuestro recluso, es decir, el régimen ordinario, también llamado segundo grado, y reservado con carácter general a penados que se adecúan a las circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir en semilibertad hasta el momento (art. 102.3 RP). Es por ello por lo que, esta clasificación se obtendrá, por normal general, cuando por exclusión, no se presenten circunstancias en el penado que conlleven a su clasificación en primer grado por concurrir alguna circunstancia del artículo 102.5 RP.

Este régimen de vida es el más extendido, al comprender, no sólo a los penados que no incurran en las circunstancias que conllevan a su clasificación en el primer grado, sino que también incluye a los penados en prisión preventiva, así como a los que no se encuentran todavía clasificados.

Dicho a rasgos generales en que consiste la clasificación en segundo grado de tratamiento penitenciario, esta claro que, para comprenderlo, es necesario explicar el régimen cerrado y ver las causas de su aplicación. Esto es así debido a que, como ya mencioné anteriormente, su clasificación se puede decir que se hace por exclusión, es decir, por no concurrir ninguna de las circunstancias tasadas que conlleven a su clasificación en primer grado.

4.2.2. El primer grado o régimen ordinario

Por ende, el primer grado, o régimen cerrado, se reserva para penados calificados de peligrosidad extrema o para reclusos que no se adaptan al régimen ordinario o abierto, mostrando una inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada en prisión.

² RÍOS MARTÍN, JULÍAN CARLOS; ETXEBARRÍA ZARRABEITIA, XABIER y PASCUAL RODRÍGUEZ, ESTHER, 2018. *Manual de ejecución penitenciaria, Defenderse en la cárcel*. 2ª Edición. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, pp. 287 y 288.

³ Artículo 90.

1. El juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos:

- a) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
- b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.
- c) Que haya observado buena conducta.

Es por ello por lo que, en virtud de la I 9/2007, de clasificación y destino de los penados; la clasificación en primer grado o régimen cerrado está sometido a los principios de excepcionalidad, en cuanto a que será la última solución cuando no existan otros mecanismos disponibles; transitoriedad, refiriéndose a que su aplicación durará el tiempo imprescindible para reconducir la conducta del interno; y subsidiariedad, en cuanto a que su aplicación exige descartar patologías psiquiátricas graves.

Explicados los principios que rigen este régimen cerrado, el artículo 102.5 RP enumera las circunstancias y sucesos que conllevan a que el recluso sea clasificado en este régimen más restrictivo teniendo en cuenta que se le clasificará en este grado atendiendo a los principios de excepcionalidad, transitoriedad y subsidiariedad que rigen al respecto.

Entre estas circunstancias a tener en cuenta para la clasificación en primer grado, cabe destacar:

- La naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo que denoten una personalidad agresiva, antisocial o violenta.
- La comisión violenta de actos (que no necesariamente requieren que sean conductas delictivas) contra la vida, integridad física, libertad sexual o propiedad.
- Pertenencia a organizaciones delictivas o bandas armadas mientras no muestren signos de abandono de estas.
- Participación activa en motines, plantas, agresiones físicas, amenazas o coacciones.
- Comisión de infracciones disciplinarias calificadas como muy graves o graves de forma reiterada y sostenida en el tiempo, que a su vez deben evidenciar una especial agresividad del interno.
- Introducción o posesión de armas de fuego en el Establecimiento Penitenciario, así como sustancias estupefacientes o psicotrópicas en una cantidad suficiente que hagan presumir que van preordenadas al tráfico.

El régimen de vida de los internos clasificados en régimen cerrado conlleva una limitación manifiesta de las actividades en común con el resto de los internos del Centro Penitenciario, comenzando con que cumplirán su estancia en celdas individuales y estarán sometidos a un especial acatamiento de las medidas de seguridad, orden y disciplina establecidas para estos casos.⁴

Si bien el primer grado penitenciario supone unas claras restricciones y limitaciones para el interno que se encuentre en este régimen, éstas se podrán agudizar dependiendo en que modalidad, dentro del primer grado, se encuentre cumpliendo su estancia. Al respecto, cabe

⁴ Estas medidas serán elaboradas por el Consejo de Dirección del Centro, previo informe de la Junta de Tratamiento.

FERRER GUTIÉRREZ, ANTONIO, 2011. *Manual práctico sobre ejecución penal y Derecho Penitenciario: Doctrina, Jurisprudencia y Formularios*. Valencia: Tirant lo Blanch, pp 324 y 325.

hablar de dos modalidades de vida diferenciadas reguladas en los artículos 91 y siguientes del RP:

- Por un lado, los centros o módulos cerrados, integrado por los internos que, como ya mencioné con anterioridad, muestren una manifiesta inadaptación al régimen común ordinario y que se ajustará a las siguientes normas:
 - Los internos tendrán, como mínimo, cuatro horas de vida en común con el resto de los internos, pudiendo aumentarse hasta una máximo de tres horas por actividades programadas.
 - El número de internos que podrán realizar actividades en grupo en estos supuestos será de un mínimo de cinco.
 - Será la Junta de Tratamiento la encargada de programar las distintas actividades culturales, recreativas, formativas, laborales o deportivas.
- Por otro lado, el régimen cerrado en departamentos especiales, reservados para los casos más extremos por la especial peligrosidad de interno y su participación, ya sea como protagonista o como inductor, en alteraciones regimentales muy graves que hayan puesto en peligro la vida o integridad de funcionarios, autoridades u otros internos o personas, independientemente de que hayan acontecido dentro o fuera del establecimiento penitenciario. Este régimen, por tanto, es más estricto que el anteriormente mencionado, rigiendo al respecto las siguientes normas:
 - Los internos tendrán, como mínimo, tres horas de salidas al patio, pudiendo ampliarse hasta tres horas más por actividades programadas.
 - En las salidas al patio no podrán estar más de dos internos juntos, pudiendo, sin embargo, aumentarse hasta un máximo de cinco internos para las actividades programadas.
 - Se realizará con carácter diario registro de las celdas y cacheo de los internos.
 - Se realizarán visitas periódicas a los internos por parte de los servicios médicos.
 - Se establecerán normas específicas para el uso de los servicios prestados por el Centro Penitenciario.

En virtud del artículo 92.2 RP, la asignación del interno a este un departamento especial, debe ser considerada como excepcional, dentro ya de la singularidad del régimen cerrado, lo que conlleva a que su asignación ha de ser sometida a revisión periódicamente, la cual no podrá posponerse más de tres meses. En cualquier caso y siempre que el interno muestre una evolución positiva, deberá procederse a una reasignación de modalidad.⁵

Por tanto, y explicadas ambas modalidades, una vez integrado el interno al régimen cerrado, se procederá a asignarlo a alguna de las dos modalidades de vida incluidas en el mismo. Esta decisión le corresponde a la Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, y que deberá ser aprobada por el Centro Directivo (art. 92.1 RP)

⁵ Evolución positiva que se dan cuanto concurren factores como: mostrar una adecuada relación con los demás, ausencia o cancelación de sanciones durante periodos prolongados en el tiempo o mostrarse participativo o colaborativo en las actividades programadas

En conclusión, independientemente de que el interno sea clasificado en el régimen cerrado ordinario o sea destinado a los departamentos especiales, está claro que en ambos casos el régimen, por su especial dureza, ha de aplicarse de forma excepcional y para los casos más graves, y consecuentemente, la regresión en grado ha de realizarse con la misma cautela.

La regresión en grado de un penado que se encuentre clasificado en segundo grado y por la cual se procederá a su clasificación en primer grado, será propuesta por la Junta de Tratamiento y, finalmente adoptada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este acuerdo deberá ser comunicado, dentro de las siguientes 72 horas, al Juez de Vigilancia Penitenciaria, así como al interno al que se le aplique esta regresión en grado indicándole los recursos que caben al respecto (art 95. 1 y 2 RP).

Es importante destacar que cabe su integración como medida urgente en supuestos de motines, agresiones físicas con arma u objeto peligroso, toma de rehenes o intento violento de evasión; o incluso como adopción de una medida rápida ante un episodio violento, aún cuando no medie en ambos supuestos un acuerdo clasificatorio al respecto (art. 95.3 RP).

4.2.3. El tercer grado o régimen abierto

Respecto al tercer grado penitenciario, destacar que lo nombraré de forma muy breve dando sólo las notas básicas del mismo puesto a que, por las circunstancias en las que se encuentra J.P.F., resulta evidente de que no se dan las características exigidas para clasificarlo en el mismo.

A rasgos generales, serán clasificados en tercer grado los internos que por sus circunstancias personales y penitenciarias estén capacitados para llevar una vida en régimen de semilibertad. Ello exige, por tanto, unas expectativas de comportamiento correcto que permitan disminuir las medidas de vigilancia.

En consecuencia, se incrementarán los permisos de salida, permitiendo así un intenso contacto del penado con el exterior; se atenuarán las medidas de control, se estimularán la participación en la organización de las actividades y se tratará de poner todos los mecanismos posibles para lograr la integración en sociedad del recluso (art. 83.2 RP).

4.2.5. El principio de flexibilidad del artículo 100.2 RP

Independientemente de los grados penitenciarios nombrados por la LOGP, con el matiz del cambio de naturaleza jurídica de la libertad condicional, el artículo 100.2 RP reconoce la posibilidad de establecer un sistema mixto de clasificación, de manera que sea posible la combinación de los distintos aspectos característicos de cada uno de los cuatro grados anteriormente mencionados.

Este sistema mixto de clasificación excepcional será adoptado por la Junta de Tratamiento a propuesta del Equipo Técnico del Centro Penitenciario y con ulterior aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria (en adelante JVP), sin perjuicio de que se pueda ejecutar sin esperar por la resolución del mismo.

Para que el JVP pueda aprobar la aplicación de tal medida, la propuesta formulada por la Junta de Tratamiento deberá contener la descripción del programa, las razones de la imposibilidad del tratamiento sin la ejecución de esta medida y cuales son y en que consisten cada uno de los elementos característicos de los distintos grados.

Para visualizar de forma más práctica lo establecido en el artículo 100.2 RP, como ejemplo podríamos decir que sería posible mediante este sistema mixto de clasificación otorgarle a una persona clasificada en segundo grado de tratamiento beneficios penitenciarios propios del tercero. Al respecto, el AAP Madrid (Sección 5ª) nº 609/2016 de 8 de febrero de 2016 establece que *se mantendrá al penado en segundo grado de clasificación, pero con la variante propia del tercer grado de que el apelante disfrutará de salidas de fin de semana*.

Sin embargo, parece más controvertida su aplicación a la inversa, de modo que se vean más restringidas las actuaciones del interno de las establecidas en el grado en el que se encuentre clasificado. En consonancia, cabe destacar el pronunciamiento del AJVP de Santander del 9 de octubre de 1996, que estima la queja de un preso que fue sometido a medidas más restrictivas de lo que le permitía su clasificación a través de la aplicación del sistema mixto de este precepto.⁶

Al respecto, también la Instrucción 9/2007, sobre la clasificación y destino de los penados, nos aclara que el artículo 100.2 RP *se considera una herramienta útil para ser aplicada antes de la progresión de los internos desde el régimen cerrado al régimen ordinario, entendida como estrategia tendente a consolidar la conducta*. Con ello podríamos descartar, por tanto, la aplicación a penados clasificados en segundo grado aspectos propios del primero o a penados clasificados en tercer grado, aspectos propios del segundo; reservándose este precepto, en la práctica, como cauce para la progresión al tercer grado.

Finalmente, y en cualquier caso, parece controvertido lo establecido en el mencionado precepto del RP, debido a que la propia LOGP no recoge este sistema flexible de clasificación, estableciendo al respecto las cuatro clasificaciones citadas con anterioridad, pudiendo ello llevar a una vulneración del principio de legalidad.

4.4. Conclusión

Explicado el sistema de clasificación habría que responder a la pregunta planteada respecto a sí J.P.F se encuentra correctamente clasificado en segundo grado de tratamiento. Para

⁶ RÍOS MARTÍN, JULIÁN CARLOS; ETXEBARRÍA ZARRABEITIA, XABIER y PASCUAL RODRÍGUEZ, ESTHER, 2018. *Manual de ejecución penitenciaria, Defenderse en la cárcel*. 2ª Edición. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, pág. 137.

responder a la cuestión planteada, sería conveniente resaltar algunas cuestiones relevantes respecto a las opciones de clasificación posibles en el caso que nos ocupa:

- En primer lugar, una de las opciones posibles sería clasificar a J.P.F en primer grado de tratamiento penitenciario. Esta idea se sostiene fundamentalmente en la conducta del penado debido a que, como se expone en el supuesto de hecho, J.P.F vulnera las normas regimentales con bastante asiduidad, su conducta es muy violenta y con circunstancias casi diarias se pone de manifiesto su total inadaptación a la vida en prisión. Además, protagonizó diversos episodios agresivos provocando diversos desperfectos materiales.
- En segundo lugar, cabría mantener al penado en segundo grado de tratamiento penitenciario. Esta idea se fundamentaría en que existen medidas menos gravosas o restrictivas de derechos que la regresión en grado. Además, de ser susceptible de aplicación el Plan de Prevención de Suicidios al interno, no sería lo más adecuado, sin lugar a duda, regresarlo en grado debido a la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentra el interno.
- En tercer lugar, cabría aplicar el sistema flexible y mixto de clasificación realizando, por consiguiente, un modelo individualizado que se adecue a las circunstancias en las que se encuentra J.P.F.: conflictivo y con una actitud inadaptativa, pero en una situación especialmente delicada, en la que no sería conveniente la regresión en grado. Esta medida, sin embargo, no es susceptible de aplicación mientras se encuentra en segundo grado ya que no se le podrían imponer medidas más restrictivas de las que le corresponde por clasificación puesto que el artículo 100.2 RP esta orientado a una eventual progresión en grado.

Vistas las opciones posibles, está claro que estamos ante un caso de gran complejidad.

El primer grado, como expliqué con anterioridad, debe aplicarse de forma excepcional y con mucha cautela ya que supone una situación bastante gravosa para quien la padece, pudiendo aplicarse sólo en los casos de reclusos calificados de extrema peligrosidad, no considerando que J.P.F. pueda ser calificado como tal.

Tal y como se dan las circunstancias es difícil saber la gravedad de los hechos en los que incurrió J.P.F., primando por tanto, por su carácter subsidiario, el mantenimiento en el segundo grado, pudiendo solucionarse los problemas de conducta que presenta J.P.F. con medidas menos restrictivas de derechos que la regresión en grado, como pueden ser por ejemplo las sanciones disciplinarias, las serían más benefactoras para J.P.F. debido a la situación en la que se encuentra (intentos de suicidio y huelga de hambre) y teniendo en cuenta el deber que tiene la Administración de velar por la vida, salud e integridad de los internos según el artículo 3.4 LOGP.

5. ¿Deberían haberse adoptado, por parte de la Administración Penitenciaria, algún tipo de medidas de tratamiento para evitar nuevos intentos suicidas?

5.1. Introducción sobre el suicidio en prisión

El ingreso en prisión genera, por norma general, un gran impacto psicológico, así como un fuerte desequilibrio emotivo, generado por factores como la propia privación de libertad y el estrés asociado a la propia vida en prisión, el tipo de delito cometido (viéndose incrementado en los casos de delitos contra la libertad sexual, contra las personas y de violencia familiar), o la añoranza, separación o pérdida de lazos familiares entre otros.

Es por ello, que el suicidio en prisión, actualmente, constituye una de las grandes preocupaciones y problemas de la Institución Penitenciaria a nivel europeo, pudiendo afirmar que el suicidio se puede considerar como un trastorno multidimensional que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, sociológicos y ambientales.⁷

En modo de mapa de variables definitorias en cuanto a el perfil de riesgo de conductas suicidas se puede decir que normalmente, habitan a ser varones, solteros que ingresaron en prisión por haber cometido algún delito contra las personas o contra la libertad sexual. De la misma forma, el riesgo incrementa cuando se encuentran en situación legal-penitenciaria preventiva o en los primeros días de internamiento.

En virtud del artículo 3.4 LOGP, corresponde a la Administración Penitenciaria velar por la vida, integridad y salud de los internos, de ahí que resulte necesario la regulación de un marco específico de prevención de suicidios, para que así sea posible garantizar este deber soportado por IIPP. Este deber se extiende a todo el personal penitenciario, debido a sus graves consecuencias y es por ello rigen los principios de celeridad e inmediatez administrativa en cuanto a la estrategia de detección e intervención en la evitación de la conducta suicida.

5.2. El Programa Marco De Prevención de Suicidios

Es por ello, por lo que actualmente, existe un Plan General de Prevención de suicidios (en adelante PPS) regulado en la Instrucción 5/2014, revisión del anterior Programa Marco de Prevención de suicidios I 14/2005, que establece a grandes rasgos la actuación pertinente de la Administración en estos supuestos.

5.2.1. Objetivos del Programa

Los objetivos del PPS son, entre otros, detectar en las personas que se encuentran internas en establecimientos penitenciarios situaciones problemáticas que puedan derivar a una conducta suicida, aplicar pautas de prevención, así como las medidas pertinentes, y establecer los

⁷ Definición extraída de la anterior y derogada Instrucción 14/2005, del Programa Marco de Prevención.

cauces necesarios para la información y coordinación entre el personal penitenciario y los distintos servicios implicados en este programa.

Este programa, una vez aplicado, no podrá tener una duración inferior a dos semanas, no habiendo, sin embargo, duración máxima del mismo, ya que se deberá de atender a la evolución del interno sin que sea deseable una cronificación de la inclusión en el PPS.

5.2.2. Factores de riesgo

Explicados los objetivos y duración de este Programa, hay que destacar que, como ya se explicó previamente, el ingreso en prisión resulta impactante, así como estresante, para un buen número de internos, lo cual implica realizar un análisis exhaustivo para detectar a cuáles de ellos se le podría aplicar el PPS, ya que en general para cualquier penado resulta cuanto menos chocante. Es por ello por lo que, para facilitar esta tarea, la I 5/2014 señala cuales son las situaciones especiales de riesgo a las que los profesionales de los establecimientos penitenciarios deberán de prestar una atención mayor. En ellas se incluyen:

- Los periodos de menor presencia de profesionales.
- Las limitaciones regimentales.
- Las situaciones de aislamiento.
- Los conflictos familiares o afectivos graves o variaciones que puedan afectarle en su situación socioeconómica o en la de sus familiares.
- La repercusión mediática en medios de comunicación de su ingreso en prisión, delito, condena u otra circunstancia penitenciaria.
- La modificación en su situación procesal-penal como penitenciaria.
- La proximidad a su excarcelación.
- Que el interno tenga algún tipo de enfermedad mental o abuso crónico de sustancias.
- El tipo de delito cometido, siendo de especial riesgo los delitos en el ámbito familiar, de violencia de género, contra las personas o contra la libertad e indemnidad sexual.
- Momentos de descenso de actividades carcelarias.
- Tener antecedentes de intentos de suicidio, así como de conducta autolesiva previa no manipulativa.

5.2.3. Aspectos procedimentales

En cuanto a los aspectos procedimentales, cualquier trabajador o colaborador de la Institución Penitenciaria que tenga conocimiento de una conducta o circunstancia que pueda conllevar riesgo al suicidio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de su superior jerárquico o directamente de las personas encargadas de su evaluación directa.

A tal efecto, el interno será valorado por el Psicólogo y Médico lo antes posible, los cuales se reunirán con posterioridad aportando los resultados de la evaluación realizada, así como otro tipo de documentación que variará dependiendo de si se trata de un interno de nuevo ingreso o se trata del resto de casos. Como resultado de la deliberación conjunta y realizada

una previa valoración de los informes, ambos profesionales propondrán a los Subdirectores la inclusión o no del interno en el PPS, siendo posteriormente los tres Subdirectores, los que fijarán la propuesta al Director del Centro Penitenciario a la vista de los informes emitidos por el Médico, Psicólogo y área de vigilancia así como de la información que ellos mismo pudieran recabar, que inicialmente no podrán ser inferiores a dos semanas de duración. Finalmente, será el director el que, tras sopesar las circunstancias, emitirá una Orden de Dirección estableciendo su inclusión o no en PPS, en cuyo caso, de ser afirmativa la respuesta, serán las áreas de Tratamiento, Sanidad y Seguridad, a través de sus subdirectores, las responsables de su cumplimiento.

5.2.4. Medidas susceptibles de aplicación

En consonancia con su inclusión en PPS, se adoptarán las medidas más oportunas elegidas por los profesionales en función de las características de cada caso y momento. Al respecto cabe distinguir entre medidas preventivas, provisionales urgentes y las programadas, descartando la explicación de las primeras ya que son medidas de mera naturaleza organizacional cuya esencia no se aplica a internos concretos, sino que se aplican al funcionamiento de cualquier establecimiento penitenciario en su conjunto.⁸

Las medidas provisionales urgentes se aplicarán con carácter preventivo y urgente mientras no se establezcan otras tras el previo estudio por los profesionales pertinentes. Entre las medidas provisionales urgentes cabe destacar la derivación urgente al Hospital pertinente, dispensar el correspondiente tratamiento médico, la inmovilización terapéutica con la correspondiente observación, la asignación de un interno de apoyo, la retirada de material de riesgo, proceder a una vigilancia especial por parte del funcionariado al interno y finalmente, ubicar al interno en una celda especial.

En cuanto a las medidas programadas, es decir las que se aplican al caso concreto tras la valoración de la situación del interno por los profesionales, caben destacar las siguientes susceptibles de adopción:

- En cuanto al control por parte de los Servicios Médicos se podrán programar consultas medicas, derivar al interno a un especialista en psiquiatría, dispensarle al penado el tratamiento farmacológico necesario, así como remitirle a enfermería para su posterior observación y tratamiento médico oportuno.
- Respecto a la intervención por parte de los Servicios de Tratamiento se podrían programar consultas psicológicas, proceder a la iniciación de un seguimiento por parte

⁸ Al respecto, cualquier establecimiento penitenciario, con independencia de que tenga o no internos incluidos en el PPS, deberá vigilar la correcta composición del Equipo Técnico de atención a Ingresos el cual deberá disponer de una información y sensibilización adecuada al respecto; exigir que exista siempre un interno de apoyo en los departamentos de ingreso; procurar el uso de celdas compartidas, evitando así situaciones de aislamiento; facilitar la llamada a familiares, velar para que las situaciones de aislamiento duren lo mínimo posible, etc.

de un Educador o valoración por parte de un Trabaxador Social, o bien proceder al contacto o asesoramiento familiar.

- En cuanto al papel de las Unidades de Vigilancia ante situaciones como esta, se podían aplicar medidas como proceder a la vigilancia nocturna o especial del interno, ubicar al mismo en una celda de especial observación, proceder a la retirada de material de riesgo que pueda tener el penado a mano o realizar un seguimiento de incidencias en las comunicaciones.
- Respecto al régimen de vida del interno podrán favorecer el contacto del interno, ya sea telefónico o presencial, con la familia o medio social; potenciar la participación del mismo en actividades o proceder al acompañamiento por interno de apoyo, ya sea de forma continua (24 horas) o en horas de cierre y actividades no comunitarias.

Finalmente hay que mencionar que el elenco de medidas antedichas, en concreto las de carácter programado, no constituye una lista cerrada de medidas susceptibles de aplicación para estos supuestos, siendo posible la aplicación de otras que se consideren oportunas. De la misma forma, se podrán aplicar varias medidas de las mencionadas con anterioridad de forma conjunta, sin ser limitada la intervención a un número concreto.

Cuando se trate de internos trasladados de un establecimiento penitenciario a otro y este tenga aplicado el PPS, el director del Centro Penitenciario remitirá obligatoriamente con al menos 24 horas de antelación al Centro de Destino, un correo electrónico en el que se informe al Centro de acogida de tal condición y las medidas aplicadas al respecto. De la misma forma, esta condición deberá constar en la portada de su expediente, en la historia clínica y documentación sanitaria de traslado. Respecto a esto, desconocemos si J.P.F ya tuvo con carácter previo aplicado el PPS en el anterior Centro Penitenciario. Ante el silencio sobre esta cuestión se entiende que no hubo intentos previos y que estas ideas suicidas aparecieron en Teixeiro, pero si la respuesta fuera afirmativa, al tratarse de un traslado a otro Centro Penitenciario, el Centro Penitenciario de Villabona tendría que haber cumplido con estos requisitos.

5.3. Conclusión

Habiendo explicado en que consiste el PPS aplicable en nuestros centros penitenciarios, así como las medidas a adoptar en situaciones de riesgo, ya sería posible responder a la pregunta planteada. Por tanto, en cuanto a si la Administración Penitenciaria debería haber adoptado medidas para evitar nuevos intentos suicidas la respuesta es clara y concisa: SI.

En primer lugar, J.P.F incurre en muchos de los factores de riesgo que nos llevaría a incluirlo, sin lugar a duda, en el PPS:

- Perfil del interno: varón de 25 años y de nacionalidad española, todas ellas incluidas como variables generales de riesgo.
- Tipo delictivo: en concreto un delito contra las personas, incluido como una de las variables criminológicas de riesgo de suicidio en prisión.

- La condena a PPR que conducirá al cumplimiento mínimo de 25 años de prisión, condena a su vez excesivamente larga y con una carga psicológica difícil de soportar. Es por ello por lo que el interno no ve el final de su condena y cree que nunca va a salir de la prisión, circunstancia incluida como uno de los factores incluidos en los modelos de detección de posible riesgo de suicidio.
- Manifestaciones directas y expresiones que llevan a pensar claramente que el interno quiere acabar con su vida. Expresiones tales como “Si nunca voy a salir de aquí, explíquenme ustedes de que me vale vivir”.
- Intentos de suicidio previos y consecutivos en las últimas semanas: el último mencionado mediante ahorcamiento, en celda y frustrado por terceras personas, lo cual no impide que vuelva a intentarlo según las variables.
- Inicio de una huelga de hambre, lo que hace más evidente que el interno se encuentra en una situación crítica.
- Conducta del propio interno en prisión: inadaptación, irritabilidad, conducta poco comunicativa (no suele pronunciar muchas palabras, y cuando lo hace es para referir expresiones de desesperación como las anteriormente mencionadas) y comportamiento principalmente solitario.
- Probablemente, por el tipo de delito cometido y el tipo de condena al que fue sometido, el hecho tuviera repercusión en los medios de comunicación, otro de los factores que hacen todavía más difícil sobrellevar el ingreso en prisión, siendo además probable que no tenga pleno apoyo familiar por el delito cometido, aunque este punto no deja de ser una suposición.

Por otro lado, en ningún caso la Administración Penitenciaria debe cuestionar o ponderar si los intentos de suicidio del interno son o no para llamar la atención, puesto que la gravedad del hecho, de haberse consumado, es igual de grave en todos los supuestos, siendo indiferente la motivación que le lleva a proceder de esa manera. Esta afirmación se basa, en que la mayoría de los internos que se suicidan han hecho previamente manifestaciones, ya sea de forma directa o indirecta sobre sus intentos suicidas.⁹

La Administración Penitenciaria, por tanto, no debe rebatir si los intentos de suicidio tienen como finalidad acabar con su vida o no, sino que cuando ocurra, por prevención, debería tomar las medidas provisionales correspondientes: en primer lugar, por el perfil de riesgo de J.P.F. y, en segundo lugar y ante todo, porque la Administración Penitenciaria tiene el deber de velar por la vida, salud e integridad de los internos y adoptar, en consecuencia, las medidas necesarias para garantizarlo.

Es importante señalar además que, el mismo PPS establece que en casos de duda o de disparidad de criterios entre los profesionales, han de primar los principios de protección sobre el interno y de minoración del riesgo, por lo que en todo caso deberían mínimo haber adoptado medidas de carácter preventivo.

⁹ Véase Anexo VI en el que se adjunta los Mitos y Realidades sobre el Suicidio en Prisión.

Poniendo sobre la balanza todas las circunstancias conocidas que se pueden incluir como factores de riesgo, no cabe duda respecto a que J.P.F tendría que haber sido incluido en el PPS. Afirmando su inclusión en este Programa, habría que valorar las medidas aplicables al respecto.

Adjunto como refuerzo a las afirmaciones anteriores, distintos Anexos incluidos en el PPS 14/2005, derogado tras la entrada en vigor de la Instrucción 5/2014, sobre el Programa Marco de Prevención de Suicidios. Ello es así, debido a que, tras haber contactado vía correo electrónico con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, la documentación señalada ya no se encuentra disponible ni publicada al tratarse de documentación de gestión de la propia Administración Penitenciaria.

Estos Anexos fueron completados tan sólo con lo datos objetivos que se aportan en el supuesto de hecho relativos a J.P.F., quedando sin cubrir los demás aspectos desconocidos del mismo. A pesar de ello, se puede apreciar que igualmente J.P.F., pese a los pocos datos conocidos, debería haber sido incluido en el PPS.¹⁰

¹⁰ Véanse Anexos del I al IV al respecto.

6. ¿Tiene la Administración un deber legal de respetar la voluntad del interno relativa a la huelga de hambre?

6.1. Introducción

Como se nos dice en el supuesto de hecho, J.P.F. ha iniciado una huelga de hambre desde el día 10 de febrero de 2019. Esto genera una situación de mayor tensión frente a los anteriores intentos de suicidios y origina el necesario cumplimiento de determinados deberes y obligaciones que tendrán que ser soportados por la Administración Penitenciaria y que se explicarán a lo largo de esta pregunta.

La huelga de hambre penitenciaria es uno de los métodos utilizados en prisión para reivindicar situaciones de vulneración de derechos, ya sea colectiva como individual. Por tanto, se fundamenta generalmente en su carácter reivindicativo, así como político, y en su finalidad de comprometer a la institución penitenciaria por la falta de libertad del huelguista, ya que, pese a que éste pone en serio peligro su vida, la mayoría de los presos no tiene intención de morir, sino forzar un cambio de postura en esta Administración.¹¹

Hoy en día, la huelga de hambre se reconoce como una forma lícita de protesta, pero no siempre fue así, llegando a debatirse en la etapa preconstitucional, la responsabilidad en la que recaía el recluso huelguista, ya que al entenderse como comisión de una falta del artículo 112 del Reglamento de los Servicios de Prisiones¹², le correspondería por tal actuación la imposición de una sanción disciplinaria de aislamiento.¹³

6.2. La relación de especial sujeción

Tradicionalmente, se ha considerado que la Administración penitenciaria adopta una posición de supremacía respecto al penado que se encuentra interno en un Centro Penitenciario y, por ende, esta relación es considerada entre las llamadas relaciones de sujeción especial. En este sentido, se pronunció la STC 74/1984, de 18 de junio¹⁴, afirmando

¹¹ CERVELLÓ DONDERIS, VICENTA, 2012. *Derecho Penitenciario*. Monografías. 3ª Edición. Valencia: Tirant lo Blanch, pág. 178.

¹² Decreto de 2 de febrero de 1956 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prisiones, adaptado de la Ley de 15 de julio de 1954. Boletín Oficial del Estado, 15 de marzo de 1956, núm 75, pp 1778 -1817.

¹³ CERVELLÓ DONDERIS, VICENTA, 2012. *Derecho Penitenciario*. Monografías. 3ª Edición. Valencia: Tirant lo Blanch, p178.

¹⁴ STC (Sala Segunda) nº 74/1985, de 18 de junio de 1985 (ECLI:ES:TC:1985:74)

*que es claro que el interno de un centro penitenciario está respecto a la Administración en una relación de sujeción especial.*¹⁵

En virtud de esta relación de sujeción especial del interno con el Estado, las IIPP quedan obligadas a velar por la vida, integridad y salud de las personas que se encuentran internas en sus establecimientos, como así lo establece el artículo 3.4 LOGP, aún a costa del status libertatis de aquellos.

Este deber supone que IIPP atenderá de forma íntegra a las necesidades sanitarias que puedan tener los reclusos mientras dure su estancia de la misma forma en la que se prestaría al conjunto de la población en virtud del artículo 208.1 RP.

Sin embargo, y aunque la tónica general sea respetar el consentimiento informado del recluso, no procediendo a la ejecución de un tratamiento médico-sanitario sin su aceptación, en ocasiones y en un supuesto de urgencia vital y peligro inminente para la vida del penado, esta asistencia sanitaria se podrá prestar en contra del mismo. Esto es así, debido a la relación de sujeción especial que une a la Administración Penitenciaria con los internos que se encuentran reclusos en sus establecimientos penitenciarios, y en virtud de los deberes que tal relación genera. Esta actuación, por tanto, estará permitida cuando sea indispensable para salvaguardar la propia vida del penado (y sólo la estrictamente destinada para ello) o cuando suponga un peligro evidente para la salud o vida de terceras personas (art. 210 RP).

De todas formas, de realizarse este tipo de actuaciones sin el consentimiento informado del paciente, habrá que dar conocimiento a la Autoridad Judicial en todo caso e incluso, en ocasiones, podrá ser necesaria autorización judicial para poder intervenir (art. 210.1 y 2 RP).

6.3. Las STC 120/1990 y 137/1990

En materia de huelga de hambre, nos encontramos con dos SSTC de gran importancia y que asientan una línea jurisprudencial en materia de huelga de hambre en prisión que, aún en la actualidad, se sigue sosteniendo. La STC 120/1990, de 27 de junio de 1990¹⁶; y la STC 137/1990, de 19 de julio del mismo año¹⁷ serán por tanto de gran importancia para comprender esta materia, siendo los hechos de los que derivan los siguientes:

¹⁵ PUENTE ABA, LUZ MARÍA, 2019. *Apuntes de la asignatura Derecho Penitenciario*, A Coruña: Facultad de Derecho, Universidad de A Coruña.

¹⁶ STC (Pleno) nº120/1990, de 27 de junio de 1990 (ECLI:ES:TC:1990:120).

¹⁷ STC (Pleno) nº137/1990, de 19 de julio de 1990 (ECLI:ES:TC:1990:137).

En 1989 se inicia una huelga de hambre llevada a cabo por 48 presos del GRAPO¹⁸ como protesta por la dispersión penitenciaria, exigiendo a través de ella el reagrupamiento de estos internos en un sólo Centro Penitenciario.

A raíz de esta protesta la Administración se enfrenta a la toma de una decisión de gran importancia:

- Por un lado, proceder a alimentar forzosamente a los reclusos, lo que podría ser constitutivo de un delito de coacciones.
- Por otro lado, respetar esa decisión, es decir, la huelga de hambre llevada a cabo por los reos, pudiendo incurrir en posible responsabilidad penal, en los casos mas extremos, en concepto de homicidio en comisión por omisión, auxilio al suicidio u omisión del deber de socorro.

Primeramente, los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria optaron por respetar la voluntad del recluso, permitiendo la alimentación forzosa sólo cuando no fuera preciso emplear la fuerza física o en los casos de pérdida de consciencia por desconocerse en ese momento la voluntad o no de seguir con esa protesta. Frente a este pronunciamiento, el Ministerio Fiscal recurrió y las Audiencias Provinciales revocaron tales pronunciamientos, hasta que finalmente se recurrió en amparo al TC, dictando el mismo las STC 120/1990 de 27 de junio y 137/1990 de 19 de julio, de las cuales se extraen las siguientes conclusiones:

- La limitación de los derechos del recluso se debe a la relación de la sujeción especial que vincula al recluso con la Administración Penitenciaria, pese a que el Derecho a la integridad física (art. 15 CE) en principio ampare frente a toda clase de intervención que carezca del consentimiento de su titular.
- En virtud del artículo 3.4 LOGP, la Administración Penitenciaria tiene el deber de velar por la vida, integridad y salud de los reclusos.
- El Derecho a la vida no garantiza el derecho a la propia muerte, por ello, pese a que la privación de la vida es un acto no prohibido por la ley no genera un derecho subjetivo que pueda movilizar el apoyo del poder público.
- De por si, la asistencia médica obligatoria, sin vulnerar ningún derecho fundamental, supone una restricción a la libertad física justificada para preservar la vida que es un valor superior.
- La alimentación forzosa sólo se autorizará cuando la vida del recluso corra un serio riesgo y respetando, en todo caso, la dignidad humana.

De todo lo anterior se deduce que la alimentación forzosa realizada violentamente usando la fuerza física, como puede ser encadenando, inmovilizando la cabeza, atando, entre otros; constituye un delito de coacciones, que sólo si respeta la dignidad del interno podrá ser justificada o inexigible por la preponderancia de la salvaguarda de la vida del recluso.

¹⁸ Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre.

La solución de permitir la alimentación forzosa cuando la vida del recluso corra serio peligro, presenta el inconveniente de dejar en manos del personal sanitario la decisión y determinación del momento en el que se debe intervenir; siendo el término utilizado, vago e impreciso a la hora de determinar el momento más adecuado para actuar. De todas formas, se puede decir que quizá sea mas adecuado que intervenir sólo en casos de pérdida de consciencia del individuo como defendían los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, teniendo en cuenta que, en ocasiones, esa pérdida de consciencia puede ser irreversible. Además, cabe señalar que la necesidad de intervención varía en función de las circunstancias patológicas del recluso, sin que sea conveniente, quizá, fijar unas reglas generales aplicables a casos que pueden ser entre ellos muy diversos.

6.4. Regulación actual

El artículo 210.1 RP, explicado ya con anterioridad, adoptó el criterio jurisprudencial de las dos señaladas sentencias. Es a raíz del acogimiento de estos pronunciamientos por lo que se permite la imposición de un tratamiento médico en contra de la voluntad del recluso cuando exista un peligro inminente para su vida, refiriéndose a un momento que requiere una muy cercana proximidad a la muerte y no por tanto a la salud.

El citado precepto sólo exige dar conocimiento a la autoridad judicial pertinente, que se entiende que será el Juez de Vigilancia Penitenciaria, limitando la obligación de solicitar autorización cuando “ello fuere preciso” y cuando se haya de proceder a su hospitalización (art. 210. 2 y 3 RP), siendo, de nuevo, términos abstractos difíciles de concretar.

Es importante señalar que el término “peligro inminente” habrá de atender a las circunstancias personales del sujeto en concreto y no a la vida en general, ya que las circunstancias variarán en función de la persona de la que se trate. Para ello, el médico del Centro Penitenciario en el que se encuentre el huelguista debe emitir un informe de seguimiento en el que se incluyan, entre otros, los datos del interno, edad, fecha de inicio de la huelga que se lleva a cabo, motivos por los cuales se inicia, constantes (tales como el peso, talla, pulsaciones), patologías previas, exploración (grado de consciencia, aspecto general, hidratación de la piel, edemas, boca, auscultación pulmonar y cardiaca, abdomen, extremidades, orientación, coloración, sudoración).¹⁹

6.5. Conclusión

Es importante destacar que está claro que una persona que ingresa en prisión no sólo es privada de su libertad ambulatoria, sino que también se ven mermados otros derechos como

¹⁹ RÍOS MARTÍN, JULÍAN CARLOS; ETXEBARRÍA ZARRABEITIA, XABIER y PASCUAL RODRÍGUEZ, ESTHER, 2018. *Manual de ejecución penitenciaria, Defenderse en la cárcel*. 2ª Edición. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, pág. 653.

puede ser la de prestar un consentimiento informado. La línea jurisprudencial de las STC 120/1990 Y 137/1990, posteriormente acogida por el propio Reglamento Penitenciario, marca una clara limitación a este consentimiento informado, en cuyo caso y por la primacía del derecho a la vida, la Administración Penitenciaria velará por ella y tomará determinadas decisiones en nombre del paciente que se encuentre en prisión. Este límite al consentimiento informado es muy discutible y controvertido teniendo en cuenta que se está poniendo un límite claro a la libertad personal y a la autonomía de la voluntad del individuo, sin justificación alguna en situaciones en la que no hay un menoscabo a los derechos de terceras personas.

Como conclusión, está claro que la Administración Penitenciaria tiene el deber legal de respetar la voluntad del interno relativa a la huelga de hambre, con los límites mencionados anteriormente: que no menoscabe los derechos de terceras personas suponiendo un peligro para su salud o vida y que no se encuentre en peligro inminente la vida del propio huelguista.

Por tanto, si tal situación no se diera, es decir, si no hubiese un riesgo serio para la vida del recluso como es el caso que nos ocupa, la Administración Penitenciaria debe respetar la decisión por parte del penado de seguir con la huelga de hambre, sin poder, en contra de su voluntad y sin el debido consentimiento informado, aplicar ningún tipo de tratamiento coactivo. No obstante, si en algún momento las circunstancias patológicas de J.P.F. se agravaran, conllevando las mismas a un peligro serio para su vida, IIPP podrá y deberá actuar al respecto debido a la relación de especial sujeción que une a la Administración Penitenciaria con el recluso.

7. ¿Qué calificación penal merecen los hechos que tuvieron lugar a las 8 de la tarde del día 13 de febrero?

7.1. Introducción

Cuando se nos pregunta sobre la calificación penal de los hechos acontecidos el día 13 de febrero a las 8 de la tarde se refiere, por tanto, a los hechos inmediatamente posteriores al intento de suicidio de J.P.F., los cuales finalizaron con una conducta lesiva hacia su compañero de celda, S.M.R., y posteriormente a uno de los dos funcionarios de prisiones que intervinieron para reducirlo.

En concreto, se señala en el supuesto de hecho que C.F.G., uno de los funcionarios que intervino para frenar la agresión, sufrió una rotura del tabique nasal y una dislocación de hombro y, finalmente, el compañero de celda S.M.R., sufrió una fractura de pómulos derecho y de tres costillas, así como numerosas escoriaciones y laceraciones en diversas partes del cuerpo.

Señalado lo anterior, resulta conveniente explicar el delito de lesiones y valorar de esta manera si esta calificación penal encaja o no con los hechos acontecidos el día anteriormente indicado y realizar a partir de este tipo delictivo las aclaraciones y matizaciones correspondientes.

Dicho esto, el tipo básico de lesiones, tal y como indica el artículo 147 CP, se consumará cuando por cualquier medio o procedimiento, se cause a un tercero una lesión que menoscabe la integridad corporal del mismo, siempre que dicha lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.

Analizando esta definición, no cabe duda de que las lesiones de las que fueron víctimas tanto S.M.G. como C.F.G. son de tal entidad que requerirán un tratamiento médico o quirúrgico posterior, debido a que ambos sufrieron, entre otras lesiones, fractura de hueso. Sin embargo, independientemente del indiscutible encuadre en este tipo delictivo es necesario hacer los correspondientes matices, y ver separadamente las lesiones de S.M.R. y C.F.G., ya que entre ellos se dan circunstancias diferentes que llevarán a calificaciones penales distintas.

7.2. Calificación penal de los hechos en relación con S.M.R.

Como ya mencioné en el párrafo anterior, en ninguno de los dos casos se cuestiona las lesiones recibidas y la imputabilidad del tipo delictivo a J.P.F. Si bien, con lo que respecta a S.M.R. se deben de tener en cuenta distintos aspectos señalados en el supuesto de hecho que nos llevarán a su correcta calificación.

Primeramente, hay que hacer mención de la expresión referida a S.M.R. por parte de J.P.F. en el momento previo a la agresión. La expresión “Como vuelvas a avisar, antes de quitarme

la vida te llevo a ti por delante “, por tanto, tiene una gran importancia para saber la intención que podía tener J.P.F al proceder a la agresión y el fin perseguido por el mismo.

Al respecto, el artículo 169 CP nos dice que será constitutivo de delito de amenazas el que amenace a otro con causarle un mal que constituya, entre otros, delitos de homicidio o lesiones con pena de prisión de uno a cinco años si se hubiera hecho la amenaza exigiendo una cantidad o condición.

Si bien la expresión referida es claramente constitutiva de un delito de amenazas, esta expresión, además, nos lleva a replantearnos si la calificación penal como un simple delito de lesiones es suficiente, o si por el contrario, pudiera haber dolo de matar y no de lesionar, y por tanto ser constitutivo de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Al respecto, la STS 168/2017 de 17 de marzo del mismo año²⁰, reitera lo establecido en la jurisprudencia del TS, señalando los siguientes indicios que nos permiten distinguir si hay dolo de matar o de lesionar. Ellos son:

- Las relaciones previas entre el agresor y el agredido.
- El comportamiento del autor previo a la agresión con especial atención a la existencia de frases amenazantes o expresiones proferidas.
- La clase de arma o instrumentos empleados.
- La zona del cuerpo a la que se dirige el ataque.
- La insistencia o intensidad de los golpes.
- El comportamiento posterior del autor.
- Y en general cualquier otro dato que pueda resultar de interés en función de las peculiaridades del caso concreto.

En consecuencia, y haciendo un balance de los datos aportados en el supuesto de hecho describiendo la agresión que J.P.F. profirió a S.M.R. resultan bastante esclarecedores para afirmar que efectivamente hubo dolo de matar y no de lesionar. Esto se puede afirmar atendiendo a las siguientes circunstancias:

- En primer lugar, J.P.F. amenaza con carácter previo a S.M.R. advirtiéndole de su intención de matarle como repitiera lo acontecido.
- En segundo lugar, se describen los sucesos como “J.P.F. estaba agrediendo brutalmente a S.M.R. encontrándose el primer recluso totalmente fuera de control” lo que da lugar a pensar de que fue una agresión de gran intensidad e insistencia.

²⁰ STS (Sala Segunda de lo Penal) nº168/2017, de 15 de marzo de 2017 (ECLI: ES:TS:2017:1034)

- En tercer lugar, la agresión se dirige a zonas especialmente delicadas del cuerpo, como es la cara, y el abdomen, lo cual refleja que la intención no era simplemente lesionar sino causar un daño mayor.
- En cuarto y último lugar, J.P.F. no cesa en ningún momento el ataque por propia iniciativa, teniendo que intervenir dos funcionarios de prisiones para reducirlo, por lo que, de no ser por los funcionarios, la agresión podría haber tenido un resultado mucho más grave, incluso la muerte.

Afirmando que efectivamente hubo dolo de matar y no de lesionar, no sería correcto imputarle a J.P.F. un delito de lesiones consumadas, sino que se le acusaría de un delito tentativo de homicidio que ya englobarían el desvalor de las lesiones proferidas atendiendo al principio *ne bis in idem* que rige el Derecho Penal.

7.3. Calificación penal de los hechos en relación con C.F.G.

Con lo que respecta a las lesiones propinadas a C.F.G., es conveniente también profundizar en diferentes aspectos de gran importancia, que nos llevarán a su correcta calificación penal.

Por ello, si bien las lesiones consecuencia de la agresión son indiscutibles hay que tener en cuenta en este caso en particular a la persona a la que se está agrediendo, en cuyo caso es un funcionario público.

Este matiz es importante a la hora de la calificación penal de los hechos debido a que en el CP se recogen determinados delitos especiales en los cuales alguna de las partes, ya sea la parte activa o pasiva del delito, son cometidos por/contra determinadas autoridades o funcionarios públicos.

Este caso vendría a ser el supuesto en el que nos encontramos, siendo de aplicación el artículo 550 CP cuando un tercero se opusiera con resistencia grave y con violencia frente a un funcionario público. El mencionado precepto señala, por tanto, que son reos de atentado contra la autoridad los que agredieran o, con intimidación o violencia, opusieran resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieran, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos.

Este precepto, por tanto, nos lleva a aplicar este tipo delictivo, más específico para el caso que nos ocupa. Sin embargo, el fundamento jurídico de las penas del delito de lesiones y el delito de atentado contra la autoridad es distinto, siendo en el caso del primero el haber atentado contra la salud de las personas, en su vertiente tanto física como psíquica, y en el caso del segundo proteger el principio de autoridad.

Al respecto, distintas Sentencias como la STS, de 24 de noviembre de 1993, dictada por la Sala Segunda de lo Penal (número de recurso 3184/1992) o la STS 74/ 2006, de 24 de enero de 2006, dictada por la Sala Segunda de los Penal (número de recurso 1558/2004) estiman condenar por delito de atentado y delito de lesiones, concurriendo por tanto un concurso ideal

de delitos en consonancia con el artículo 77 CP, de tal forma que no consideran que el delito de atentado absorba el desvalor de la lesión ya que se protegen en ambos delitos bienes jurídicos protegidos distintos.

Por ello, entiendo que será de aplicación el artículo 550 CP por haber puesto resistencia grave a la autoridad, usando la fuerza física, en concurso ideal con el delito de lesiones tipificado en el artículo 147 CP, al derivarse de los mismos hechos dos delitos distintos.

7.4. Calificación penal de los hechos en relación con el otro funcionario

En este caso, el segundo funcionario no resulta lesionado. Sin embargo, J.P.F. también tendría que responder por el delito del artículo 550 CP frente a este, por haberse opuesto con resistencia grave utilizando la violencia frente a un funcionario público. Me remito, por tanto, a lo explicado en el apartado anterior con respecto a este tipo delictivo.

7.5. Conclusiones

En conclusión y referente a la calificación penal de los hechos:

- Con lo que respecta a la calificación penal de los hechos en relación con S.M.R. concluyo con que J.P.F. responderá en concepto de autor por tentativa de homicidio, al considerar que las lesiones proferidas fueron con ánimo y dolo de matar y no de lesionar.
- En relación con C.F.G. concluyo con que J.P.F. responderá por un delito de atentado del artículo 550 CP, por resistirse de forma grave y violenta a un funcionario público, en concurso ideal (art.77 CP) con el delito básico de lesiones del artículo 147 CP, al entender que el fundamento jurídico de las penas es distinto.
- En relación con el otro funcionario, del cual no se remite lesión alguna, J.P.F. responderá por un delito de atentado contra la autoridad tipificado en el artículo 550 CP por oponer resistencia grave frente al mencionado funcionario público.

8. ¿Estos hechos pueden tener repercusión en la actual situación penitenciaria de J.P.F y S.M.R?

8.1. Repercusión de los hechos en la situación penitenciaria de J.P.F.

El régimen disciplinario hace referencia a las conductas prohibidas dentro de los establecimientos penitenciarios, así como las sanciones previstas para ellas. Por la gravedad de los hechos acontecidos, resulta conveniente analizar sus consecuencias, así como valorar, atendiendo a las circunstancias, que sanción disciplinaria resulta más adecuada aplicar, si es que finalmente procede su interposición.

Las faltas disciplinarias aparecen recogidas en los artículos 108, 109 y 110 del derogado Reglamento Penitenciario 1201/1981, de 8 de mayo; el cual mantiene en vigor algunos preceptos, entre ellos los mencionados con anterioridad.

Este RP clasifica las faltas en muy graves, graves y leves, y de ellas derivarán, dependiendo de su gravedad, las distintas sanciones a imponer al infractor.

Al respecto, el artículo 108 de RP 1201/1981 (que como ya dije está derogado salvo determinados preceptos que mantienen su vigencia), recoge una lista de las llamadas faltas muy graves, destacando, en consonancia con los hechos acaecidos en el caso que nos ocupa, las letras b,c y d del mencionado precepto. Los citados subapartados califican tipifican como falta muy grave:

- Por un lado, agredir, amenazar o coaccionar a las autoridades o funcionarios judiciales o de instituciones penitenciarias cuando éstos se encuentren en el ejercicio de sus cargos o con ocasión de los mismos (letra b).
- Por otro lado, agredir o hacer coacción grave a otros internos (letra c).
- Finalmente, la resistencia activa y grave al cumplimiento de las órdenes recibidas por la autoridad o funcionario en le ejercicio de sus funciones (letra d).

Estas faltas, son claramente aplicables al caso que nos ocupa debido a que J.P.F. agrede y lesiona tanto al funcionario que interviene para reducirlo como al interno de celda S.M.R. (letras b y c). Además, resultaría también tipificable la resistencia activa y grave a las órdenes recibidas por los funcionarios momentos antes de intervenir, ordenándole que cesara en la agresión, entendiendo como tal mantener una conducta que se opone a una orden legítima y concreta por medio de una reacción física y abiertamente violenta como es el caso.²¹

Tras la concurrencia de las citadas faltas debemos valorar si concurre aplicar las correspondientes sanciones disciplinarias. Claramente, la lógica nos lleva a aplicarlas ya que

²¹ RÍOS MARTÍN, JULÍAN CARLOS; ETXEBARRÍA ZARRABEITIA, XABIER y PASCUAL RODRÍGUEZ, ESTHER, 2018. *Manual de ejecución penitenciaria, Defenderse en la cárcel*. 2ª Edición. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, pág.465.

concorre no una, sino tres faltas muy graves dando lugar, además, a la concurrencia de un concurso real de infracciones del artículo 236.1 RP, en relación con el artículo 42.4 LOGP. Al respecto, los mencionados preceptos determinan que el culpable de dos o mas faltas enjuiciadas en un mismo expediente disciplinario, se le impondrán las sanciones correspondientes a todas ellas para su cumplimiento simultáneo si fuera posible, procediendo en caso contrario al cumplimiento de las mismas por orden de gravedad.

El RP prevé en su artículo 233 para estos supuestos (de infracciones calificadas como faltas muy graves) la aplicación de la sanción de aislamiento en celda de 6 a 14 días de duración o la sanción aislamiento de hasta siete fines de semana.

El RP es, por tanto, muy claro a la hora de establecer las sanciones que corresponden a este tipo de infracciones, sin embargo, la teoría no resulta tan sencilla a la hora de proceder a su aplicación y analizar todas las circunstancias que rodean los hechos objeto de resolución.

Primeramente, resulta contradictorio aplicar una sanción de aislamiento en celda a un interno al que, por sus circunstancias, resulta imprescindible la aplicación del PPS, y para el cual no resultaría nada beneficioso su aplicación, sino todo lo contrario. No resultaría ético ni adecuado aplicar dicha sanción, teniendo en cuenta que el gran porcentaje de los suicidios que se dan en prisión se consuman cuando el interno se encuentra sólo en su celda, motivo por el cual, una de las principales medidas que recoge el PPS en estos casos es asignarle al recluso un interno de apoyo que lo supervise y apoye.

Al respecto, el RP establece en su artículo 255.1 que siempre que las circunstancias lo aconsejen, la Comisión disciplinaria, de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento podrá acordar motivadamente la suspensión de las sanciones de aislamiento impuestas, por lo que atendiendo, en este caso a las circunstancias personales de J.P.F., lo más conveniente sería suspender la ejecución de dichas sanciones a la espera de que se den circunstancias de mejora.

En segundo lugar, tampoco resultaría adecuado de acuerdo con los principios básicos que rigen el Derecho Penal, sancionar dos veces por los mismos hechos, de tal forma que se sancione por vía administrativa primero, al ser los hechos constitutivos de faltas muy graves y, posteriormente, por vía penal al resultar los mismos hechos a su vez constitutivos de delito.

Si bien el artículo 232.4 RP permite su doble castigo, en vía administrativa y en vía penal, este quedará condicionado a la interposición de ambas conjuntamente cuando se fundamenten en motivos de seguridad y de buen orden regimental. De no ser este el fundamento de la sanción, se daría identidad en el fundamento de la misma, por lo que no sería posible su sanción en vía administrativa a la vez, si siendo, sin embargo, sancionable vía penal. Esto es así debido a que ya se daría identidad no sólo de sujetos y objeto, sino que ya también del fundamento de la sanción.

Es por ello por lo que cuando por una conducta que no afecte a la seguridad colectiva de la cárcel se dicte una condena penal, y a su vez, una sanción administrativa, se vulnerará en

principio *ne bis in idem*. Entendiendo tal fundamento como una concepción material más concreta, solo existiría alteración del orden si una conducta afecta a varios presos y, debido a ella, pueden originarse plantes, motines o actos comunes, no conllevando, por tanto, cualquier incumplimiento de las normas a esa lesión del buen orden regimental, ya que sino estaríamos afirmando que cualquier infracción cometida por un interno alteraría la seguridad y buen orden de la prisión, equiparando así la gravedad de todas las faltas.²²

Al no ser este el fundamento de la pena en el caso que nos ocupa no resultaría sancionable simultáneamente por estas dos vías, por tanto, bastaría con la sanción que el CP establezca, al ser los hechos constitutivos de diversos delitos, los cuales ya fueron explicados en la pregunta anterior.

8.2. Repercusión de los hechos en la situación penitenciaria de S.M.R

Cuando un interno mantiene, por lo contrario, una conducta buena o ejemplar, la Administración Penitenciaria podrá decidir respecto al mismo beneficiarlo a través de las llamadas recompensas penitenciarias. Las recompensas penitenciarias se asocian, por tanto, al llamado régimen disciplinario, que, aunque sean benefactoras para el interno, no tienen la misma naturaleza jurídica que los llamados beneficios penitenciarios, los cuales se relacionan con el tratamiento y las actividades resocializadoras. Es por ello por lo que constituyen, tal y como afirma Gallego Díaz, M., “la cara positiva, incentivadora y gratificante, del régimen disciplinario”.²³

Las recompensas penitenciarias, aparecen reguladas en los artículos 263 y 264 RP. Tal y como establece el artículo 263 RP, los actos que pongan de manifiesto una buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los internos, serán estimulados con las siguientes recompensas:

- Comunicaciones especiales y extraordinarias
- Becas de estudio, donación de libros y otros instrumentos de la misma naturaleza
- Prioridad en la participación de salidas programadas culturales
- Reducción de las sanciones impuestas
- Premios en metálico
- Notas meritorias
- Cualquier otra recompensa de carácter análogo

La recompensa mediante la cual se decida beneficiar a S.M.R por su buena conducta y avisar a los funcionarios de prisiones del intento de suicidio de J.P.F., la decidirá la Comisión

²² RÍOS MARTÍN, JULIÁN CARLOS; ETXEBARRÍA ZARRABEITIA, XABIER y PASCUAL RODRÍGUEZ, ÉSTER, 2018. *Manual de ejecución penitenciaria, Defenderse en la cárcel*. 2ª Edición. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, pág. 472-473.

En consonancia con PIÑOL RODRIGUEZ, J., op.cit.

²³ GALLEGO DÍAZ, M., 2007. *Beneficios penitenciarios y cumplimiento efectivo de la pena: de la impresión a la restricción*. Cuadernos de Política Criminal núm.91, págs. 179-181.

Disciplinaria del Centro, atendiendo a los méritos en los que incurra el interno, en virtud del artículo 264 RP.

8.3. Conclusión

Por tanto, con lo que respecta a la repercusión que tendrán los hechos acontecidos para los dos internos que intervienen en los mismos, concluyo con que:

- Por un lado y con lo que respecta a J.P.F., resulta evidente su incursión en tres infracciones del régimen disciplinario calificadas como faltas muy graves. Estas tres faltas, por agresión al funcionario de prisiones, por agredir a un interno y por resistirse de forma activa y grave a las órdenes recibidas por los funcionarios que intervienen en los hechos, constituyen a su vez, un concurso real de infracciones del artículo 236.1 RP, lo que tendrá como consecuencia el cumplimiento simultáneo de las sanciones impuestas por cada una de ellas, siempre y cuando esto fuera posible, procediendo en el caso contrario, al cumplimiento de las mismas de forma sucesiva por orden de gravedad.

Por las infracciones en las que incurre J.P.F., que como ya señalé son calificadas como muy graves, el RP establece como sanción para cada una de ellas el aislamiento en celda de 6 a 14 días o de 7 fines de semana.

Es evidente que por la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentra J.P.F. no resulta conveniente su aplicación inmediata debido a que debería estar incluido en el PPS, por lo que se procedería a la suspensión de las mismas hasta su eventual mejoría (art. 255.1 RP).

Sin embargo, de acuerdo con el principio *ne bis in idem* que rige nuestro Derecho Penal, no procedería su sanción vía administrativa si a su vez fueran sancionados vía penal al ser constitutivos de delito y en ellos concurriera identidad de objeto, sujeto y fundamento. Por lo que, si finalmente se decide inculpar a J.P.F. por los delitos cometidos, no sería coherente sancionarlo doblemente por el mismo motivo en el propio establecimiento penitenciario.

Por ello y finalmente, en ningún caso se podría establecer la sanción de aislamiento en celda correspondiente de acuerdo con lo establecido en el RP: primeramente, por inadecuada atendiendo a las circunstancias personales en las que se encuentra el penado procediendo a la suspensión de las mismas; y finalmente, por posible vulneración de uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, si es que finalmente se condenara a J.P.F. por los delitos cometidos, ya que sostengo el fundamento de ambas es el mismo.

- Por otro lado y con lo que respecta a S.M.R., lo hechos le repercutirían, por lo contrario de forma positiva, beneficiándole la Comisión Disciplinaria con la recompensa disciplinaria que considere más adecuada.

9. ¿Fue legalmente correcto el uso de la fuerza por parte de los funcionarios?

9.1. Los medios coercitivos

Cuando en un Centro Penitenciario aparecen determinadas situaciones de violencia y de alteración al orden, la LOGP permite al funcionariado de prisiones, el uso de los medios coercitivos que se determinen reglamentariamente como mecanismos para ayudar a mantener la seguridad y convivencia ordenada.

En este sentido, como afirma Bueno Arús (2010), los medios coercitivos o también llamados medidas coercitivas, se configuran como modalidades de fuerza aplicables sobre los internos para conjurar riesgos tasados y extraordinarios ocasionados por los reclusos con comportamientos que comprometen y ponen en riesgo la seguridad y convivencia ordenada de los establecimientos penitenciarios, en orden al restablecimiento del buen orden regimental.²⁴

9.2. Clases de medios coercitivos

Al respecto, el artículo 72 del RP, menciona los medios coercitivos permitidos y susceptibles de aplicación en una lista cerrada, admitiendo como tales:

- El aislamiento provisional en celda: consistente en la separación del interno respecto al resto de población reclusa en su propia celda u otra de las mismas características o condiciones. Esta medida se usará de forma extraordinaria y cuando se den supuestos de agresividad manifiesta o excitación nerviosa grave que, en cuanto desaparezca, habrá de levantarse dicha medida. Esta medida constituye una medida similar a la sanción de aislamiento provisional, por lo que, en consecuencia, regirán las mismas condiciones de cumplimiento de la sanción previstas en los artículos 43 LOGP y 254 RP.
- El uso de defensas de goma: de uso excepcional en motines o revueltas violentas. Hay que destacar al respecto que sólo se permiten las defensas de goma, excluyendo armas u instrumentos de otros materiales.
- Los aerosoles de acción adecuada o sprays: de uso también excepcional y de composición homologada. Es por ello por lo que deberán ser gases lacrimógenos que no produzcan daños y cuya composición y uso no genere ningún riesgo para la salud o integridad física de los reclusos.
- El uso de esposas: que se utilizarán para frenar la agresividad del interno.

²⁴ BUENO ARÚS, FRANCISCO; CASTRO ANTONIO, JOSÉ LUIS; FERNÁNDEZ ARÉVALO, LUIS; RÍOS MARTÍN, JULIÁN CARLOS, 2010. *LEY GENERAL PENITENCIARIA*. 2ª Edición. Madrid: Colex, pág. 455.

- El uso de la fuerza física personal: la cual entraña el uso de contacto personal del personal penitenciario sobre el interno afectado. Ésta habrá de ser proporcionada a la violencia que se trate de impedir.
- Finalmente quedan, sin embargo, expresamente prohibidas en las funciones de vigilancia de los funcionarios las armas de fuego. Al respecto, por tanto, no se permitirá el uso o porte de armas de fuego por parte del personal penitenciario, pero sí a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando el director del Centro recabe su auxilio en supuestos de peligro inminente y grave para la vida o integridad de las personas o de daños graves a instalaciones y cosas ante las cuales resulten insuficientes las medidas de seguridad ordinarias y extraordinarias (art. 72.5 RP)

9.3. Requisitos para su uso

Es importante señalar que cualquiera de los medios mencionados deberá usarse en todo caso de forma proporcional al fin pretendido y siempre que no haya otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad que se pretende, sin poder usarse, de ninguna forma, como sanción encubierta. Por ello, el uso de estos instrumentos violentos irá dirigido exclusivamente al restablecimiento del orden y normalidad de la convivencia carcelaria, y sólo podrán utilizarse bajo la concurrencia de los siguientes requisitos extraídos de la LOGP y RP, pues, de no ser así, podrá ser constitutivo de delito de torturas o contra la integridad moral de los artículos 173 a 177 CP:

- La Ley ofrece una lista tasada de supuestos que legitiman su utilización, los cuales estarán legitimados cuando la medida se aplique a fin de impedir actos de evasión o violencia de los internos, evitar posibles daños a sí mismos u a otras personas o cosas, o para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo (art. 45.1 LOGP).
- Es necesario que concurra para su uso una situación crítica, urgente y de excepcionalidad, de modo que todos ellos tienen carácter preventivo para restablecer la normalidad.
- No se pueden usar para funciones de averiguaciones de delitos o sanciones administrativas, siendo, de ser ese el motivo, constitutivo de delito de torturas.
- Deben de ser proporcionales a la situación, durar el tiempo mínimo imprescindible, siendo necesario usar el medio menos gravoso para conseguir el fin perseguido, sin que, en ningún caso supongan una sanción encubierta (art. 45.3 LOGP y 72.1 RP)
- Los medios coercitivos permitidos, aparecen tasados en el mencionado precepto reglamentario, lo cual impide el uso de otros diferentes no previstos en el mismo (art. 45.1 LOGP)
- Estos medios no son susceptibles de aplicación en situaciones en las que su aplicación iría dirigida a mujeres presas gestantes, lactantes, que tuvieran hijos consigo o a las presas hasta seis meses después de la terminación del embarazo. De la misma forma, tampoco se pueden aplicar a los enfermos convalecientes de enfermedad grave, salvo en los supuestos de peligro inminente para su integridad física o de terceras personas. (art. 72.2 RP)

9.4. Aspectos procedimentales

El uso de estos medios coercitivos, han de ser autorizados, por norma general, por el director de Centro Penitenciario, con la salvedad de que en casos de urgencia se empleen sin la correspondiente autorización, en cuyo caso se le comunicará inmediatamente para que el mismo lo ponga en conocimiento del JVP (art. 45.1 y 2). De aquí surge la distinción entre los medios coercitivos ordinarios (los que se aplican con una previa autorización del director del Centro) y los medios coercitivos de urgencia (aplicados directamente por el personal penitenciario).

Pese a que la LOGP no es clara en cuanto al traslado del uso de estas medidas coercitivas al JVP en los supuestos en los que si se haya recaba la autorización pertinente al Director del establecimiento, el artículo 72.2 RP, nos aclara se dará traslado en todos los supuestos, estableciendo que “el Director comunicará inmediatamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria la adopción y cese de los medios coercitivos, con expresión detallada de los hechos que hubieran dado lugar a dicha utilización y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento”.²⁵

Parece así, que lo que debe hacer JVP es controlar, en todos los supuestos, la legalidad de la aplicación de estas medidas, y no solo en los casos de urgencia. Por ello, la puesta en conocimiento de los medios coercitivos a los JVP por el director en todos los casos en los que se apliquen, constituye una clara proyección de las funciones de control judicial atribuidas en artículo 76.1 LOGP, entre las que se encuentra “salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse”.

El JVP valorará, por tanto, si se ajusta a Derecho o no el uso de esta medida coercitiva, provocando en caso de respuesta negativa, su pronunciamiento en alguno de los siguientes sentidos:

- Instar a la Dirección para que vele en lo sucesivo por la estricta observancia de la normativa legal y reglamentaria.
- Participar en los antecedentes a la Dirección General de IIPP como órgano competente en materia de inspección de las instituciones penitenciarias (art. 79 LOGP) si se apreciara infracción administrativa por parte de los funcionarios de prisiones.
- Deducir testimonio si llegara a apreciarse que la conducta de los funcionarios pudiera ser constitutiva de infracción penal, por su imposición indebida o innecesaria, pudiendo conllevar a una inhabilitación especial del mismo por un periodo de dos a seis años (art. 533 CP).

²⁵ BUENO ARÚS, FRANCISCO; CASTRO ANTONIO, JOSÉ LUIS; FERNÁNDEZ ARÉVALO, LUIS; RÍOS MARTÍN, JULIÁN CARLOS, 2010. *LEY GENERAL PENITENCIARIA*. 2ª Edición. Madrid: Colex, pág. 460.

9.5. Conclusión

Ponderando en este caso, si la actuación de los funcionarios de prisiones en el caso que nos ocupa fue adecuada o no, habrá que tener en cuenta, por tanto, los requisitos mencionados para que su intervención se adecúe a Derecho:

- Primeramente, habrá que ponderar si los hechos acontecidos el 13 de febrero fueron de un carácter urgente suficiente, debido a que no lo fue, para hacer uso de la fuerza como medio coercitivo, deberían haber solicitado previamente autorización al director del Centro. Sin embargo, en la práctica prácticamente todos los medios coercitivos tienen carácter urgente, y siguiendo la tónica general, este caso también lo fue. No cabe duda de que la agresión originada fue de forma fortuita e imprevisible en la que era totalmente necesaria una intervención rápida y efectiva de los funcionarios para no generar daños mayores.
- En segundo lugar y habiendo concluido con que ante la gravedad de la situación la intervención tuvo que ser inminente, habrá que valorar si la misma se realizó de forma correcta, proporcional y con la duración necesaria para el fin pretendido. Al respecto, no hay indicio alguno que demuestre un uso desproporcionado. Los funcionarios intervinientes actuaron usando la fuerza física ante una situación en la que, si no se hiciera, la agresión podía terminar con un resultado fatal. Ambos funcionarios con carácter previo procuraron reducirlo de forma no gravosa, dando varias órdenes para que éste cesara en el intento. Al no resultar efectivas y por la gravedad de los hechos, optaron por intervenir, empleando la fuerza física sólo el tiempo necesario para lograr con efectividad que J.P.F. cesara en la agresión.

Por todo ello, concluyo con el uso de la fuerza empleado por los dos funcionarios de prisiones fue correcto y totalmente lícito, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la LOGP y RP para proceder a su intervención.

10. ¿Se podría exigir algún tipo de responsabilidad a la Administración penitenciaria por el grave incidente regimental acontecido?

10.1. Introducción

Como nota introductoria, cuando hablamos de responsabilidad de la Administración Penitenciaria podemos hablar de dos responsabilidades distintas:

- Por un lado, la responsabilidad civil subsidiaria que se da en los supuestos en los que los hechos acaecidos, en este caso establecimiento penitenciario, son constitutivos de delito y condenados mediante un proceso penal, dándose en los mismos una infracción por parte de sus titulares o empleados de la Administración de los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad²⁶. La responsabilidad civil subsidiaria derivará de los daños causados y su fundamento deriva por el hecho de haberse cometido el delito en establecimientos sometidos al control del Estado. Esta claro que, cuando el reo es condenado por un delito del cual se derivaron unos daños, el responsable directo será el mismo, siendo responsable con carácter subsidiario la Administración Penitenciaria en este caso, por ejemplo, en caso de insolvencia del condenado.
- Por otro lado, la responsabilidad patrimonial de la administración, que se da independientemente de que los hechos sean o no constitutivos de delito, y resultaría sólo cuando concurre un funcionamiento anormal de la Administración. El fundamento ya no es, por tanto, la comisión de un hecho delictivo, sino que será la infracción del deber de vigilancia o la ausencia de las preceptivas medidas de seguridad que debería haber tomado la correspondiente administración (arts. 33 a 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del mismo año).²⁷

Explicados los dos tipos de responsabilidad posibles, hablaré a lo largo de este apartado de la posible responsabilidad de la Administración Penitenciaria teniendo en cuenta los sucesos narrados en el supuesto de hecho. Al respecto, señalaré:

- La responsabilidad de la Administración por las lesiones de J.P.F a S.M.R.
- La responsabilidad de la Administración por las lesiones de J.P.F a los funcionarios.
- La posible responsabilidad de la Administración Penitenciaria por no haber adoptado las medidas correspondientes del PPS, si efectivamente se consumara el suicidio por parte de J.P.F.

²⁶ Art. 120.3 CP “ Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.

²⁷ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, de 2 de octubre de 2015, núm 236 (ELI: <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/40/con>)

- La posible responsabilidad de la Administración Penitenciaria si el medio coercitivo aplicado el día 13 de febrero se hubiera realizado sin la correspondiente proporcionalidad.

10.2. Responsabilidad de la Administración por las lesiones de J.P.F. a S.M.R.

Con lo que respecta a la posible responsabilidad de la Administración Penitenciaria derivada de la agresión que recibe S.M.R. por parte de J.P.F., sería conveniente analizar, para saber si debe o no responder por la misma, si efectivamente hay un nexo de causalidad entre los hechos acontecidos y la *culpa in vigilando* del funcionariado o personal responsable del establecimiento penitenciario.

Al respecto es conveniente señalar que:

- En este caso concreto, el supuesto de hecho señala que en cuanto S.M.R. avisa a los funcionarios de prisiones del intento de suicidio por parte de J.P.F., acuden con la mayor brevedad posible y dentro de sus posibilidades, tardando apenas 5 minutos en llegar a la celda en la que se encontraban los internos. A simple vista, no parece razonable responsabilizar a la Administración Penitenciaria de los hechos acontecidos por una simple demora de 5 minutos de duración, además justificada ya que los funcionarios se encontraban atendiendo un caso similar en otra celda del establecimiento.
- Por otro lado, tampoco constaba una mala relación entre ambos reclusos, sin que hubiese con carácter previo ninguna incidencia semejante, por lo que IIPP no tenía porqué extremar las precauciones, ya que no había ningún indicio para hacerlo.
- Finalmente, la agresión se produce empleando la fuerza física, sin que J.P.F. utilizase ningún tipo de arma u objeto peligroso. De haberla utilizado, si que sería posible imputarle a los funcionarios de prisiones una infracción del deber de vigilancia.

Como ejemplo de caso similar a este supuesto de hecho, la SAP, Sección 10, de Alicante de 13 de abril de 2016 desestima la concurrencia de ningún tipo de responsabilidad por parte de la Administración argumentando que no constaba que hubiera tenido problemas con otros internos ni que existiera previa enemistad o problema entre los dos internos implicados en la agresión.²⁸

Es por ello por lo que, al no concurrir un nexo de causalidad entre la agresión acontecida y el funcionamiento anormal de la administración no podría hablarse de responsabilidad de la Administración, ni patrimonial ni civil subsidiaria.

²⁸ GALLEGO MARTÍNEZ, VICTORIA, “Responsabilidad civil subsidiaria de la Administración penitenciaria por actos cometidos por internos”, pp 15. (Recuperable en: <https://ficip.es/wp-content/uploads/2017/06/Gallego-Mart%C3%ADnez.-Comunicación.pdf>)

10.3. Responsabilidad de la Administración por las lesiones de J.P.F a los funcionarios.

En este apartado nos encontramos con que la lesión o agresión la reciben dos funcionarios de IIPP. Mediante el Protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (en adelante PEAFA)²⁹ y la I 6/2017³⁰, se establecen las medidas y protocolo de actuación a seguir en estos supuestos.

Centrándonos, en la PEAFA y en el apartado 3 y 4 de la I 6/2017, el procedimiento de actuación cuando un trabajador ha sufrido una agresión y las medidas de apoyo centrándonos en el aspecto jurídico son las siguientes:

- En primer lugar el funcionario agredido lo notificará a la Oficina de Seguridad o a su Subdirector, firmando tanto trabajador como el Jefe de Servicios el Modelo de Notificación de Agresión.³¹
- Posteriormente y dentro del plazo máximo de siete días el Subdirector de Seguridad realizará la recogida básica de datos que hará constar en el parte o análisis de incidentes.³²
- A continuación, tras la recogida básica de datos, y en una fase más avanzada del procedimiento, se procederá a la investigación de la agresión de forma más minuciosa y detallada que en la fase anteriormente mencionada.³³
- Finalmente, se procederá a identificar las causas que han originado la agresión, proponiendo, a raíz de las mismas, las medidas preventivas o de protección más adecuadas.³⁴

Por tanto, y finalizado todo este protocolo de actuación, el Director remitirá con la mayor brevedad posible a la Autoridad Judicial los hechos que han dado lugar a la agresión y mantendrá, tanto este como el Centro, el seguimiento hasta el final del curso de la denuncia remitida.

Todos los funcionarios tendrán suscrita una Póliza de Seguros de Accidentes por la Secretaría General de IIPP y una de Responsabilidad Civil. Desde la óptica de prevención de riesgos laborales, las lesiones sufridas por los empleados públicos en el desempeño de sus funciones

²⁹ Protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por Resolución de 8 de junio de 2017.

³⁰ Instrucción 6/2017, sobre las medidas de implementación relacionadas con el protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social dependientes de las Secretaría General de I.P.P.

³¹ Véase el Anexo VII en el que se adjunta el Modelo de Notificación de Agresión.

³² Véase el Anexo VIII en el que se adjunta el Análisis de Incidentes o Ficha de recogida de datos.

³³ Véase el Anexo IX en el que se adjunta la Ficha de Investigación de Incidentes.

³⁴ Véase el Anexo X en el que se adjunta Formulario de Posibles Causas y Medidas Preventivas.

se considerarán accidentes de trabajo por lo que se regirá para ellos el procedimiento establecido en estos supuestos.

Por ello, se hace indispensable consultar la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales³⁵, la cual establece en su artículo 3 que será de aplicación para el personal al servicio de las Administraciones Públicas por lo que convierte a la Administración como veladora de la salud de los empleados a su servicio, teniendo que ejercer el deber “*in vigilando*” respecto a los mismos y, por tanto, respetar las medidas incluidas en la misma Ley.

Se entendería, por tanto, que podría ser exigible la responsabilidad de Administración por la agresión de J.P.F. a los funcionarios de prisiones si concurriera un funcionamiento anormal de la misma, es decir, cuando hubiera omitido las medidas de seguridad oportunas y establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En el caso que nos ocupa, no se generaría según los datos aportados en el supuesto de hecho, sin perjuicio de la viabilidad de reclamar al Seguro de Accidentes suscrito por la Secretaria General de IIPP la indemnización correspondiente por las lesiones padecidas.

10.4. Posible responsabilidad de la Administración por la no inclusión en el PPS.

En este apartado hablaré de la responsabilidad a la que tendría que frente la Administración Penitenciaria de haberse consumado el suicidio de J.P.F. sin haber aplicado el PPS ni haber adoptado las medidas incluidas en el mismo por parte de esta.

La Administración Penitenciaria, como ya expliqué en preguntas anteriores, tiene el deber de velar por la vida, integridad y salud de los internos. Al establecerse este deber mediante la LOGP, la Administración deberá responder en el momento en el que no haya adoptado todas las medidas a su alcance para evitar la muerte del recluso por suicidio, lo que revelaría un funcionamiento anormal del servicio público penitenciario generador de la responsabilidad patrimonial.³⁶

Siendo un caso como este tan evidente de inclusión en el PPS, ya explicado a lo largo de este trabajo; la consumación del suicidio por parte de J.P.F. conllevaría inexcusablemente a una responsabilidad patrimonial de la administración por no haber tomado las precauciones necesarias, siendo éste un caso tan evidente de inclusión en el PPS, en el que además el interno llevaba en la última semana dos intentos de suicidio.

Como respaldo a esta afirmación tan rotunda, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de octubre de 2006 estima la responsabilidad patrimonial de la Administración Penitenciaria ante el suicidio de una reclusa por ahorcamiento, sin que la Administración adoptara con

³⁵ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial del Estado, de 10 de noviembre de 1995, núm 269 (ELI: <https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con>).

³⁶ DE FUENTES BARDAJÍ, J., 2010. *Manual de Responsabilidad Pública*. 2ª Edición. Navarra: Thomson Reuters, pág. 795.

carácter previo ninguna medida para evitarlo, siendo previsible por los antecedentes de diversos intentos de suicidio frustrados.³⁷

Del mismo modo, otra Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de noviembre de 2006 también aprecia responsabilidad patrimonial de la Administración por un suicidio de un interno, también mediante ahorcamiento, constatada la existencia de varios intentos suicidas previos, sin que además se le prestara asistencia farmacológica ni psicológica por parte del personal penitenciario.³⁸

Siendo un caso tan similar a los citados, no cabe duda de que, si finalmente se consumara el suicidio sin que la Administración Penitenciaria tomara las medidas necesarias como estaba haciendo hasta ahora, ésta tendría que hacer frente a la posterior y eventual responsabilidad patrimonial derivada de los hechos.

10.5. Posible responsabilidad de la Administración por la intervención de los funcionarios.

En este apartado, analizaré la posible responsabilidad que desencadenaría un uso desproporcionado de los medios coercitivos, en este caso, del uso de la fuerza por parte de los funcionarios de prisiones.

Al respecto, quedaría fuera de la responsabilidad de la Administración Penitenciaria los hechos causados por el personal funcionario o laboral que presta sus servicios en los Establecimientos Penitenciarios, puesto que el régimen aplicable en estos supuestos será el general de responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.³⁹

La responsabilidad por los actos cometidos por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, por tanto, se separará en distintos bloques:

- En primer lugar, de los hechos podría derivar una responsabilidad disciplinaria, que en ningún caso será exigida por el perjudicado, sino que tendrá carácter doméstico, para preservar el buen funcionamiento del servicio público, y que atentan contra la disciplina interna entre el funcionario y la propia Administración.
- En segundo lugar, una responsabilidad patrimonial, en cuyo caso responderá de forma directa la Administración por los daños causados por parte de un funcionario a un tercero en el ejercicio de sus funciones, procediendo, por tanto, a la indemnización sin perjuicio de que posteriormente la Administración ejercite una acción de regreso contra el

³⁷ SAN Madrid (Sección 5ª) nº63/2006, de 4 de octubre de 2006 (RJ 2006, 245444)

³⁸ SAN Madrid (Sección 5ª) nº 758/2005, de 14 de noviembre de 2006 (ECLI:ES:AN:2006:5204)

³⁹ DE FUENTES BARDAJÍ, J., 2010. *Manual de Responsabilidad Pública*. 2ª Edición. Navarra: Thomson Reuters, pág. 791

funcionario para exigirle que se haga cargo de la misma cuando medie dolo, culpa o negligencia grave.⁴⁰

- Por último y finalmente, podría derivarse de los hechos una responsabilidad penal en caso de que fueran constitutivos de delito (en este caso delito de torturas o contra la integridad moral de los arts. 173 a 177 CP) y de la responsabilidad civil que correspondiera derivada del mismo. En caso de ser constitutivo de delito, la Administración Penitenciaria podría tener que responder a la responsabilidad civil de forma subsidiaria en virtud del artículo 121 CP, sin perjuicio de que pudiera haber una responsabilidad patrimonial directa por funcionamiento anormal de la Administración⁴¹.

Vistas las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos y al tratarse este apartado de una simple hipótesis que no concurre en este supuesto de hecho, no podríamos hablar de una responsabilidad concreta al respecto.

Por tanto, y sólo tras una eventual responsabilidad del funcionariado de prisiones, se analizaría la responsabilidad que correspondiera atendiendo a las circunstancias concurrentes.

⁴⁰ Arts. 145 y 146 de la Ley 5/1999, de 13 de enero, del Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

⁴¹ Art. 121 CP: *El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.*

11. CONCLUSIONES FINALES

A lo largo de este trabajo se pudo analizar, entre otras cosas, la repercusión que tienen las condenas excesivamente largas, como es en este caso la prisión permanente revisable, en los reclusos que las padecen. Así pues, se aprecia que es muy complicado mantener la disciplina en personas que no tienen nada que perder, puesto que no ven una fecha de extinción de su condena (por no hablar de las posteriores dificultades de resocialización que experimentan tras una eventual puesta en libertad).

J.P.F muestra de forma constante una conducta inadaptativa y conflictiva, llegando en ocasiones a intentar quitarse la vida ante la negativa de pasar el resto de sus días en prisión. Por tanto, podríamos hablar de que uno de los grandes desencadenantes de los hechos relatados, es la condena a una pena excesivamente larga e indefinida, como es prisión permanente revisable, pese a que no se haga mención sobre la misma en las cuestiones que se nos plantean.

Otro de los grandes condicionantes a la hora de tomar muchas de las decisiones respecto a la situación penitenciaria de J.P.F., es el estado en el que se encuentra y su necesaria inclusión en el PPS⁴². Esta situación hace que se deliberen con todavía más cautela las cuestiones planteadas, al tratarse de una situación de especial vulnerabilidad en la que cualquiera de las decisiones tomadas por la Administración Penitenciaria puede repercutir gravemente en el estado anímico del interno.

Dicho esto, se puede ver como, pese a la mala conducta que manifiesta J.P.F. en ocasiones, lo mas adecuado será mantenerlo en segundo grado de tratamiento penitenciario puesto que el régimen cerrado está previsto para los casos de extrema peligrosidad del recluso y esta claro que no estamos ante este supuesto. Lo más correcto sería, atendiendo al criterio de oportunidad y de adecuación de la medida, aplicarle medidas menos gravosas y restrictivas de derechos como pueden ser las sanciones disciplinarias y no proceder a una regresión en grado. Esto nos permitiría, no sólo aplicar correctamente el primer grado penitenciario de acuerdo con los principios que lo rigen (como el principio de excepcionalidad o subsidiariedad), sino también poder sancionar igualmente los hechos al ser constitutivos de infracciones disciplinarias de forma mas adecuada, pudiendo, si se estimara necesario, proceder a su suspensión debido a las circunstancias personales del interno para su posterior cumplimiento. Tampoco parecería lógico, por ejemplo, regresarlo en grado, el cual tiene como una de las principales características el cumplimiento de la pena en celdas individuales, cuando procedería, por los intentos de suicidio frustrados, designarle un interno de apoyo.

No, obstante y pese a el deber de la Administración de velar por la salud, integridad y vida de los internos, IIPP deberá de respetar la huelga de hambre iniciada por J.P.F. mientras la misma no suponga un peligro inminente para la vida (no, por tanto, la salud) y no afecte a la salud o integridad de terceras personas.

⁴² Veáanse Anexos I al VI al respecto.

Con lo que respecta a los hechos acaecidos el 13 de febrero y su calificación penal, J.P.F. responderá en concepto de autor por tentativa de homicidio frente a la agresión de S.M.R., al proferirse con dolo de matar y no de lesionar. En relación con los funcionarios de prisiones, responderá por un delito de atentado del artículo 550 CP, por resistirse de forma grave y violenta a funcionarios públicos, con la peculiaridad de que responderá también frente a C.F.G. por un delito básico de lesiones del artículo 147 CP en concurso ideal (art.77 CP) con el anteriormente señalado tipo delictivo.

Estos hechos, además, constituyen tres faltas disciplinarias calificadas como muy graves de acuerdo con la legislación penitenciaria, concurriendo así un concurso real de infracciones del artículo 236.1 RP. Dichas faltas son susceptibles de sanción de aislamiento en celda, la cual podrá ser suspendida atendiendo a las circunstancias personales del interno en virtud de lo establecido en el RP, sin perjuicio de que no podrán ser doblemente sancionadas (vía penal y también vía administrativa) de acuerdo con el principio *ne bis in idem* al concurrir identidad de objeto, sujeto y fundamento. Por lo contrario, S.M.R. podrá ser premiado por su conducta a través de las llamadas recompensas penitenciarias.

Por otra banda, la aplicación de la fuerza física como medio coercitivo por parte de los funcionarios de IIPP se estima correcta debido a la gravedad y urgencia de los hechos y tras haberse aplicado de forma proporcional al fin pretendido y no tener otra posibilidad de solucionar la controversia con un medio menos gravoso que el aplicado.

Por ello, no se le podría exigir a la Administración Penitenciaria ningún tipo de responsabilidad por incidente mencionado, al no concurrir ningún tipo de anormalidad en su funcionamiento. No obstante, si finalmente se consumara el suicidio sin haberse aplicado con anterioridad el PPS ni ningún tipo de medida al respecto como se estaba haciendo hasta el momento, la Administración Penitenciaria será responsable por ello, concurriendo así los presupuestos para reclamar la responsabilidad patrimonial de la misma.

BIBLIOGRAFIA

ABOGACIA GENERAL DEL ESTADO, 2010. *Manual de Responsabilidad Pública*. 2ª Edición. Navarra: Thomson Reuters.

BUENO ARÚS, FRANCISCO; CASTRO ANTONIO, JOSÉ LUIS; FERNÁNDEZ ARÉVALO, LUIS; RÍOS MARTÍN, JULÍAN CARLOS, 2010. *LEY GENERAL PENITENCIARIA*. 2ª Edición. Madrid: Colex.

CERVELLÓ DONDERIS, VICENTA, 2012. *Derecho Penitenciario*. Monografías. 3ª Edición. Valencia: Tirant lo Blanch.

CERVELLÓ DONDERIS, VICENTA, 2015. *PRISIÓN PERPETUA Y DE LARGA DURACIÓN: Régimen jurídico de la prisión permanente revisable actualizado con la L.O. 1/2015 de 30 de marzo*. Valencia: Tirant lo blanch.

FERRER GUTIÉRREZ, ANTONIO, 2011. *Manual práctico sobre ejecución penal y Derecho Penitenciario: Doctrina, Jurisprudencia y Formularios*. Valencia: Tirant lo Blanch.

JUANATEY DORADO, CARMEN, 2011. *Manual de Derecho Penitenciario*. 1ª Edición. Madrid: Iustel.

MIR PUIG, C., 2018. *Derecho Penitenciario: El cumplimiento de la pena privativa de libertad*. Barcelona: Atelier.

RÍOS MARTÍN, JULÍAN CARLOS; ETXEBARRÍA ZARRABEITIA, XABIER y PASCUAL RODRÍGUEZ, ESTHER, 2018. *Manual de ejecución penitenciaria, Defenderse en la cárcel*. 2ª Edición. Madrid: Universidad Pontificia Comillas.

Documentación:

BARRIOS FLORES, Luis Fernando, 2002, “La responsabilidad administrativa por suicidio en la institución penitenciaria”, *Revista de Estudios Penitenciarios*, núm. 249, 2002, pp. 89-134.

GALLEGO MARTÍNEZ, VICTORIA, “Responsabilidad civil subsidiaria de la Administración penitenciaria por actos cometidos por internos”, pp 15. (Recuperable en: <https://fcp.es/wp-content/uploads/2017/06/Gallego-Mart%C3%ADnez.-Comunicaci%C3%B3n.pdf>)

GRIJALBA RODRIGUEZ, J.C. “Los medios coercitivos en los medios penitenciarios”, *La Ley, Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 3, 1986.

GUILLÉN NAVARRO, NICOLÁS A., 2012, “Análisis actual de la responsabilidad patrimonial en el ámbito penitenciario”, *Revista Aragonesa de Administración Pública*, ISSN 1133-4797, núms 39-40, Zaragoza, pp 425-442 .

MARTÍNEZ RUIZ, JESÚS, 2017, “La relación jurídico-penitenciaria, especial referencia a la protección de la vida de los reclusos”, *Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, ISSN 1695-0194, pp 1-21.

PUENTE ABA, LUZ MARÍA, 2019. *Apuntes de la asignatura Derecho Penitenciario*, A Coruña: Facultad de Derecho, Universidad de A Coruña.

SURROCA COSTA, ALFONS, 2016, “La responsabilidad civil subsidiaria de las Administraciones Públicas”, *ADC (tomo LXIX)*, Girona, pp 100-151.

Sitios web:

Agrupación de Cuerpos de la Administración Penitenciaria (ACAIP). Recuperado de: www.acaip.es [consulta: 2 de junio].

Instituciones Penitenciarias (IIPP). Recuperado de: www.institucionpenitenciaria.es [consulta: 24 de abril].

APÉNDICE JURISPRUDENCIAL

SAN Madrid (Sección 5ª) nº63/2006, de 4 de octubre de 2006 (RJ 2006, 245444)

SAN Madrid (Sección 5ª) nº 758/2005, de 14 de noviembre de 2006 (ECLI:ES:AN:2006:5204).

AAP Madrid (Sección 5ª) nº 609/2016, de 8 de febrero de 2016.

STC (Sala Segunda) nº 74/1985, de 18 de junio de 1985 (ECLI:ES:TC:1985:74)

STS (Sala Segunda de lo Penal) nº168/2017, de 15 de marzo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1034)

STC (Pleno) nº120/1990, de 27 de junio de 1990 (ECLI:ES:TC:1990:120).

STC (Pleno) nº137/1990, de 19 de julio de 1990 (ECLI:ES:TC:1990:137).

APÉNDICE LEGISLATIVO

Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. Boletín Oficial del Estado, 05 de octubre del 1979, núm. 239, (ELI: <https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/09/26/1/con>)

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. Boletín Oficial del Estado, 15 de febrero de 1996, núm. 40, (ELI: <https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/02/09/190/con>)

Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. Boletín Oficial del Estado, 23 de junio de 1981, núm. 149, (ELI: <https://www.boe.es/eli/es/rd/1981/05/08/1201/con>) **(derogado salvo algunos preceptos útiles para la realización de este trabajo).**

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, pp. 33987-34058 (ELI: <https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con>)

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Boletín Oficial del Estado, de 15 de noviembre de 2002, núm. 274, (ELI: <https://www.boe.es/eli/es/l/2002/11/14/41>)

Ley 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado, de 14 de enero de 1999, núm. 12, pp. 1739-1755 (ELI: <https://www.boe.es/eli/es/l/1999/01/13/4>)

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial del Estado, de 10 de noviembre de 1995, núm 269 (ELI: <https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con>)

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, de 2 de octubre de 2015, núm 236 (ELI: <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/40/con>)

Instrucción 5/2014, sobre el Programa Marco de Prevención de Suicidios. Disponible en: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/instruccionesCirculares/Instruccixn_I-5-2014.pdf

Instrucción 6/2017, sobre las medidas de implementación relacionadas con el protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social dependientes de las Secretaría General de II.PP. Disponible en: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/instruccionesCirculares/I-6-2017-Protocolo_agresiones.pdf

Protocolo específico de actuación fronte a las agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por Resolución de 8 de junio de 2017. Disponible en: <http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/legislacion/PEAFA.pdf>

Instrucción 9/2007, sobre la clasificación y destino de penados. Disponible en: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/instruccionesCirculares/I-9-2007-CLASIFICACION_PENADOS.pdf

Instrucción 17/2011, de Protocolo de intervención y normas en régimen cerrado. Disponible en: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/instruccionesCirculares/CIRCULAR_17-2011.pdf

ANEXOS:

Anexo I: Modelo de detección de posible riesgo de suicidio. Documento incluido en la Instrucción 14/2005, sobre el Programa Marco de Prevención de Suicidios. Pág. 41.

Anexo II: Variables de riesgo de suicidio en prisión. Documento incluido en la Instrucción 5/2014, sobre el Programa Marco de Prevención de Suicidios. Pág. 37 a 40.

Anexo III: Orden de dirección. Documento incluido en la Instrucción 5/2014. Pág. 19.

Anexo IV: Escala de Plutchick. Documento incluido en la Instrucción 5/2014. Pág. 25.

Anexo V: Detección de situación de crisis. Documento incluido en la Instrucción 5/2014. Pág. 26.

Anexo VI: Mitos y realidades sobre el suicidio en prisión. Documento incluido en la Instrucción 5/2014. Pág. 42.

Anexo VII: Modelo de notificación de agresión. Documento incluido en Protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por Resolución de 8 de junio de 2017 (PEAFA). Pág. 25.

Anexo VIII: Análisis de incidentes. Documento incluido en el PEAFA. Pág. 26 a 27.

Anexo IV: Ficha de investigación de incidentes. Documento incluido en el PEAFA. Pág. 28.

Anexo X: Posibles causas y medidas preventivas aplicables. Documento incluido en el PEAFA. Pág. 29 a 30.

ANEXO I

PPS-Anexo 13

MODELO DE DETECCIÓN DE POSIBLE RIESGO DE SUICIDIOINTERNO: JPF

DEPARTAMENTO: _____

Tras la entrevista mantenida con el interno citado, este funcionario aprecia lo siguiente:

(poner una cruz en una o varias de las afirmaciones que se consideran ciertas en el comportamiento de los últimos días)

- ☐ El interno rechaza la toma de medicación prescrita o pide un incremento de la dosis.
- ☐ El interno no suele hacer vida ordinaria, se mantiene apartado de las actividades del Centro.
- ☒ El interno muestra poco interés en las relaciones con otros compañeros, su estilo de comportamiento es principalmente solitario.
- ☐ Se ve al interno decaído, cabizbajo y parece triste.
- ☐ El interno llora mientras se produce la entrevista.
- ☒ El interno no ve el final de su condena, cree que nunca podrá salir de la prisión.
- ☒ El interno se encuentra más irritado de lo que es habitual en él, enfadándose por aspectos que no tienen demasiada importancia.
- ☒ Afirma no tener ganas de comer y se observa (o comentan otros internos) que ingiere pequeñas cantidades de alimento.
- ☐ Refiere tener problemas para conciliar el sueño, despertarse agitado durante la noche y este aspecto no se había producido con anterioridad.
- ☐ En la conversación con el interno, se percibe que su forma de hablar es demasiado lenta y le cuesta hilar las ideas.
- ☐ En la conversación con el interno, se percibe que su forma de hablar es demasiado rápida y salta de un tema a otro constantemente.
- ☐ El interno cuenta que se siente muy culpable por algún acontecimiento que ha sucedido en el Centro o en su vida en libertad.
- ☒ El interno afirma querer acabar con su vida.
- ☒ El interno ha relatado a algún interno o funcionario que ya ha pensado el plan para acabar con su vida.
- ☐ El interno ha regalado posesiones u objetos personales que apreciaba

Lo que comunico a Vd. a los efectos que proceda.

En _____ a _____ de _____ de 2005

Firma el funcionario N°

ANEXO II

PPS-Anexo 12

VARIABLES DE RIESGO DE SUICIDIO EN PRISIÓN

Entre paréntesis se expresa la puntuación ponderada de cada una de las variables.

1. Variables generales

- 1.1. **Sexo**
 - 1.1.1. Hombre (2)
 - 1.1.2. Mujer (1)
- 1.2. **Edad**
 - 1.2.1. < 21 años (5)
 - 1.2.2. 21-30 años (4)
 - 1.2.3. > 50 años (3)
 - 1.2.4. 31-40 años (2)
 - 1.2.5. 41-50 años (1)
- 1.3. **Nacionalidad**
 - 1.3.1. Español (2)
 - 1.3.2. Extranjero (1)
- 1.4. **Estado civil**
 - 1.4.1. Separado-Viudo (4)
 - 1.4.2. Soltero (3)
 - 1.4.3. Convivencia (2)
 - 1.4.4. Casado (1)

2. Variables criminológicas

- 2.1. **Antecedentes**
 - 2.1.1. Internamiento judicial (3)
 - 2.1.2. Penado (2)
 - 2.1.3. Preventivo (1)
 - 2.1.4. No (0)
- 2.2. **Carrera delictiva**
 - 2.2.1. En aumento (4)
 - 2.2.2. En su línea (3)
 - 2.2.3. En disminución (2)
 - 2.2.4. Confiesa cifra negra (1)
 - 2.2.5. No (0)
- 2.3. **Tipo delictivo actual**
 - 2.3.1. C/ las personas (5)
 - 2.3.2. C/ la libertad sexual (4)
 - 2.3.3. C/ salud pública (3)
 - 2.3.4. C/ propiedad (2)
 - 2.3.5. Otros (1)

3. Variables institucionales

- 3.1. **Clasificación penitenciaria**
 - 3.1.1. Internamiento judicial (4)
 - 3.1.2. 1º grado (3)
 - 3.1.3. Sin clasificar (2)
 - 3.1.4. Otros (1)

3.2. Tempo continuado prisión

- 3.2.1. 2-4 anos (5)
- 3.2.2. 3-12 meses (4)
- 3.2.3. 1-3 meses (3)
- 3.2.4. 1-30 días (2)
- 3.2.5. > 4 anos (1)

3.3. Aislamiento regimental

- 3.3.1. Aislamiento celda (3)
- 3.3.2. 75.1 RP (2)
- 3.3.3. Outros (1)
- 3.3.4. No (0)

4. Variables de interacción

4.1. Participación destinos / ocupación

- 4.1.1. No (1)
- 4.1.2. Si (0)

4.2. Historia de infracciones

- 4.2.1. Sí (1)
- 4.2.2. No (0)

4.3. Permisos / Salidas

- 4.3.1. No (1)
- 4.3.2. Si (0)

4.4. Conducta grupal

- 4.4.1. Solitario + rechazado (4)
- 4.4.2. Colonizador + rechazado (3)
- 4.4.3. Solitario (2)
- 4.4.4. Colonizador (1)
- 4.4.5. Colaborador (0)

4.5. Apoyos exteriores

4.5.1. De familia adquirida

- 4.5.1.1. No (4)
- 4.5.1.2. Sí (0)

4.5.2. De familia de origen

- 4.5.2.1. No (3)
- 4.5.2.2. Sí (0)

4.5.3. De amigos...

- 4.5.3.1. No (2)
- 4.5.3.2. Sí (0)

4.5.4. De Asociaciones, ONGs,...

- 4.5.4.1. No (1)
- 4.5.4.2. Sí (0)

4.6. Relaciones conflictivas

4.6.1. Con internos

- 4.6.1.1. Sí (4)
- 4.6.1.2. No (0)

4.6.2. Con familia adquirida

- 4.6.2.1. Sí (3)
- 4.6.2.2. No (0)

4.6.3. Con familia de origen

- 4.6.3.1. Sí (2)
- 4.6.3.2. No (0)

4.6.4. Con funcionarios

- 4.6.4.1. Sí (1)
- 4.6.4.2. No (0)

5. Variables clínicas	
5.1. Incidentes estresantes recientes (menos de 3 meses)	
5.1.1. Pérdida gran prestigio social	(6)
5.1.2. Pérdida personas significativas	(5)
5.1.3. Pérdida propiedades	(4)
5.1.4. Pérdida trabajo	(3)
5.1.5. Pérdida órgano-miembro principal	(2)
5.1.6. Pérdida órgano-miembro no princ.	(1)
5.1.7. Sin incidentes	(0)
5.2. Impacto primeros días prisión	
5.2.1. Extremadamente alto	(4)
5.2.2. Alto	(3)
5.2.3. Bajo	(2)
5.2.4. No se aprecia	(1)
5.3. Historia personal de intentos suicidas	
5.3.1. Suicidio frustrado	(5)
5.3.2. Parasuicidios	(4)
5.3.3. Internamiento psiquiátrico	(3)
5.3.4. Tratamiento específico	(2)
5.3.5. Ideación suicida	(1)
5.3.6. No	(0)
5.4. Historia familiar de intentos suicidas	
5.4.1. Consumados /frustrados	(3)
5.4.2. Internamiento psiquiátrico	(2)
5.4.3. Tratamiento específico	(1)
5.4.4. No	(0)
5.5. Falta de salud	
5.5.1. Muy grave	(2)
5.5.2. Grave	(1)
5.5.3. No	(0)
5.6. Minusvalía	
5.6.1. Muy grave	(2)
5.6.2. Grave	(1)
5.6.3. No	(0)
5.7. Deformidad física	
5.7.1. Muy grave	(2)
5.7.2. Grave	(1)
5.7.3. No	(0)
5.8. Diagnósticos	
5.8.1. Trastorno depresivo mayor, esquizofrenia	(6)
5.8.2. Alcoholismo – drogodependencias	(5)
5.8.3. Trastornos adaptativos – TAP – SHDA ...	(4)
5.8.4. Estados de ánimo extrem. disfórico-irritable	(3)
5.8.5. Amenazas, advertencias ...	(2)
5.8.6. Fobias significativas ...	(1)
5.8.7. No	(0)

- 6. Con intento de suicidio previo**
 - 6.1. Método**
 - 6.1.1. Ahorcamiento (4)
 - 6.1.2. Ingesta ... (3)
 - 6.1.3. Autolaceración (2)
 - 6.1.4. Otros (1)
 - 6.2. Hora**
 - 6.2.1. 14 – 22 horas (3)
 - 6.2.2. 22 - 08 horas (2)
 - 6.2.3. 08 -14 horas (1)
 - 6.3. Desencadenante – Precipitante del curso vital**
 - 6.3.1. Problemas regimientales (3)
 - 6.3.2. Problemas familiares (2)
 - 6.3.3. Trastornos de personalidad (1)
 - 6.4. Lugar**
 - 6.4.1. Celda (2)
 - 6.4.2. Otros (1)
 - 6.5. Frustrado por**
 - 6.5.1. Terceros (3)
 - 6.5.2. Fallo técnico (2)
 - 6.5.3. El mismo (1)
 - 6.6. Intervención profesional previa**
 - 6.6.1. Sí (1)
 - 6.6.2. No (2)

ANEXO III

PPS-Anexo 3

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TEIXEIRO**ORDEN DIRECCIÓN****ASUNTO:** INCLUSIÓN EN EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE SUICIDIOS (P.P.S.)**INTERNO:** JPF**NIS:****MÓDULO:**

En aplicación de la Instrucción sobre la Prevención de Suicidios, por la presente se tomarán las siguientes medidas respecto al interno arriba referenciado, que se modificarán o suprimirán en función de su seguimiento:

MEDIDAS PROGRAMADAS.

- Seguimiento por los Servicios Médicos:
 - ☒ Consulta médica programada.
 - ☐ Derivación para valoración por especialista en psiquiatría.
 - ☐ Ingreso en enfermería para observación y tratamiento médico.
- Seguimiento por los Servicios de Tratamiento:
 - ☒ Consulta psicológica programada.
 - ☐ Seguimiento directo por su Educador.
 - ☐ Valoración por el Trabajador Social.
- Régimen de vida (con carácter general en su departamento)
 - ☒ Acompañamiento continuo (24 horas) por interno de apoyo.
 - ☐ Acompañamiento por interno de apoyo en horas de cierre y actividades no comunitarias.
 - ☐ Favorecer comunicaciones con la familia y medio social.
 - ☐ Potenciar participación en actividades:
 - ☐ Ocupacionales, deportivas, de tiempo libre.
 - ☐ Remuneradas.
 - ☐ Otras (especificar):

MEDIDAS ESPECIALES

- ☐ Vigilancia especial por los funcionarios.
- ☒ Retirada de material de riesgo.
- ☐ Ubicación en celda especial de observación (si de dispone)
- ☐ Seguimiento de incidencias en las comunicaciones
- ☐ Otras (especificar):

FECHA DE ALTA:

En _____, a ____ de _____ de _____

EL DIRECTOR

ANEXO IV

PPS-Anexo 6

Nombre IPF

Centro Penitenciario TEIXEIRO Fecha

ESCALA DE PLUTCHICK

Se trata de un cuestionario **autoadministrado**

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas tratan sobre cosas que Vd. ha sentido o hecho. Por favor conteste cada pregunta simplemente con un "SI" o "NO".

	SI	NO
1. ¿Toma de forma habitual algún medicamento como aspirinas o pastillas para dormir?		
2. ¿Tiene dificultades para conciliar el sueño?		
3. ¿A veces nota que podría perder el control sobre sí mismo/a?		
4. ¿Tiene poco interés en relacionarse con la gente?	X	
5. ¿Ve su futuro con más pesimismo que optimismo?	X	
6. ¿Se ha sentido alguna vez inútil o inservible?		
7. ¿Ve su futuro sin ninguna esperanza?	X	
8. ¿Se ha sentido alguna vez fracasado/a, que sólo quería meterse en la cama y abandonarlo todo?		
9. ¿Está deprimido/a ahora?		
10. ¿Está Vd. separado/a, divorciado/a o viudo/a?		
11. ¿Sabe si alguien de su familia ha intentado suicidarse alguna vez?		
12. ¿Alguna vez se ha sentido tan enfadado/a que habría sido capaz de matar a alguien?	X	
13. ¿Ha pensado alguna vez en suicidarse?	X	
14. ¿Le ha comentado a alguien, en alguna ocasión, que quería suicidarse?	X	
15. ¿Ha intentado alguna vez quitarse la vida?	X	
Puntuación Total	7	

➔ **Valoración:** Un valor superior a 6 indica riesgo de suicidio. Cuanto mayor es el valor obtenido mayor es el riesgo de suicidio. No fotocopiar esta valoración.

ANEXO V

PPS-Anexo 7

CONFIDENCIAL

DETECCIÓN DE SITUACION DE CRISIS (Psicólogo)

Interno: JPF	NIS:	
Fecha :	Hora:	Entrevistador/a:

VARIABLES	Puntuación entre:	Puntuación asignada
1. Ingreso reciente (menos de 7 días)	0 - 3	
2. Tipología delictiva (homicidio, asesinato, libertad sexual, violencia doméstica)	0 - 3	3
*3. Sintomatología depresiva (disforia, agitación, ideas suicidas inespecíficas, sentimientos de culpa, alteración del apetito o del sueño)	0 - 5	2
4. Intentos previos de suicidio (últimos 3 meses)	0 - 3	3
5. Problemática tóxico-alcohólica presente	0 - 3	
6. Pérdidas familiares recientes	0 - 3	
7. Diagnóstico reciente enfermedad grave (últimos 3 meses) o estado avanzado	0 - 3	
8. Ausencia o pérdida de apoyo exterior	0 - 3	
9. Variables de personalidad: impulsividad, vulnerabilidad, indefensión, recursos personales deficitarios.	0 - 3	2
10. Trastorno mental actual	0 - 3	
*11. Ideación suicida o planes de suicidio en la actualidad.	0 - 5	5
PUNTUACIÓN		15

➔ Una puntuación **igual o superior a 9** será suficiente para la adopción de medidas preventivas preliminares hasta la valoración conjunta del caso.

* Una puntuación máxima (5) en la **variable 3 u 11** será suficiente para la adopción de medidas preventivas preliminares.

ANEXO VI

PPS-Anexo 14

MITOS Y REALIDADES SOBRE EL SUICIDIO EN PRISIÓN

- **Mito:** Los internos que hacen manifestaciones o amenazas sobre el suicidio no se suicidan.
- **Hecho:** La mayoría de los internos que se suicidan han hecho bien directa o indirectamente manifestaciones sobre sus intenciones suicidas
- Mito:** El suicidio sucede de repente y sin aviso.
- Hecho:** La mayoría de los actos suicidas suponen una estrategia cognitiva elaborada para hacer frente a diferentes problemas personales.
- Mito:** Los internos que intentaron suicidarse fue porque perdieron el control en un momento determinado pero no volverá a ocurrir.
- Hecho:** Un interno con un historial de uno o más intentos de suicidio está en un riesgo más elevado que aquellos internos que nunca lo intentaron.
- Mito:** El interno suicida ha decidido morir.
- Hecho:** La mayoría de los suicidas tienen sentimientos confusos sobre el suicidio, tienen sentimientos ambiguos sobre vivir o no, no tienen claro la necesidad de morir y la mayoría desea ser "rescatado".
- Mito:** Preguntar al interno e indagar sobre sus pensamientos o conductas suicidas puede provocar que se quiten la vida.
- Hecho:** No se incita al interno al suicidio cuando se le muestra interés por su vida hablando sobre la posibilidad de suicidio.
- Mito:** Todos los internos suicidas están mentalmente trastornados.
- Hecho:** Aunque la persona suicida se siente extremadamente desgraciada, no está necesariamente trastornado.
- **Mito:** Los internos potencialmente suicidas pueden ser fácilmente diferenciados de aquellos que se autolesionan con fines manipulativos.
- **Hecho:** La calificación de intención manipulativa en una autolesión no resulta útil a la hora de distinguir los intentos más letales de los menos letales.
- Mito:** Si alguien se quiere suicidar verdaderamente, no hay nada que podamos hacer en realidad.
- Hecho:** Con una buena preparación y un buen programa casi todos los suicidios penitenciarios se pueden evitar.

ANEXO VII



MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Número
número

ANEXO I. MODELO DE NOTIFICACIÓN DE AGRESIÓN

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre	Haga clic aquí para escribir texto
Unidad	Haga clic aquí para escribir texto

DATOS DEL INCIDENTE

Fecha	Haga clic aquí para escribir texto	Hora	Haga clic aquí para escribir texto
Lesión (aporte informe de lesiones)	Haga clic aquí para escribir texto.		
Descripción de la agresión	Haga clic aquí para escribir texto.		

Los datos de carácter personal proporcionados serán incorporados a un fichero del que es responsable LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS y serán tratados conforme a las estipulaciones presentes en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

El Jefe de Servicios
(Fecha y firma)

El trabajador
(Fecha y firma)

En -----, a --- de ----- de -----

En -----, a --- de ----- de -----

ANEXO VIII



MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARIA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Número
número

ANEXO II. ANÁLISIS DE INCIDENTES

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS.

A. DATOS DEL INCIDENTE					
Centro Penitenciario de	Haga clic aquí para escribir texto.				
Lugar del hecho	Haga clic aquí para escribir texto.				
En caso de producirse en un módulo especifique	Haga clic aquí para escribir texto.				
Fecha del incidente	Haga clic aquí para escribir texto.				
Hora del incidente	Haga clic aquí para escribir texto.				
Descripción Haga clic aquí para escribir texto.					
Número de trabajadores participantes	Haga clic aquí para escribir texto.				
Número de trabajadores lesionados	Haga clic aquí para escribir texto.				
Número de internos implicados	Haga clic aquí para escribir texto.				
Tipo de agresión	Haga clic aquí para escribir texto.				
Comunicación autoridad judicial	<div style="text-align: right;"> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Situación actual</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Resultado final</td> <td>-----</td> </tr> </table>	Situación actual	-----	Resultado final	-----
Situación actual	-----				
Resultado final	-----				

B. DATOS DEL INTERNO	
Apellidos y nombre	Haga clic aquí para escribir texto.
Fecha de nacimiento	Haga clic aquí para escribir texto.
Sexo	Hombre <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/>
Nacionalidad	Haga clic aquí para escribir texto.
Situación procesal	Haga clic aquí para escribir texto.
Situación penitenciaria	Haga clic aquí para escribir texto.
Historial de incidencias regimentales	Haga clic aquí para escribir texto.
Patologías	Haga clic aquí para escribir texto.
Tiempo de permanencia (en meses)	Haga clic aquí para escribir texto.
Pertenencia a FIES	Haga clic aquí para escribir texto.
Repercusiones penitenciarias	Haga clic aquí para escribir texto.



MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARIA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

C. DATOS DEL TRABAJADOR									
Apellidos y nombre	Haga clic aquí para escribir texto.								
Fecha de nacimiento	Haga clic aquí para escribir texto.								
Sexo	Hombre <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/>								
Tipo de empleado	Haga clic aquí para escribir texto.								
Puesto desempeñado	Haga clic aquí para escribir texto.								
Antigüedad (en meses)	<table border="1"> <tr> <td>En la Administración:</td> <td>Fecha</td> </tr> <tr> <td>En el Centro:</td> <td>Fecha</td> </tr> <tr> <td>En el actual puesto de trabajo:</td> <td>Fecha</td> </tr> <tr> <td>En el servicio actual:</td> <td>Fecha</td> </tr> </table>	En la Administración:	Fecha	En el Centro:	Fecha	En el actual puesto de trabajo:	Fecha	En el servicio actual:	Fecha
En la Administración:	Fecha								
En el Centro:	Fecha								
En el actual puesto de trabajo:	Fecha								
En el servicio actual:	Fecha								
Incidente sin lesión	Daño psicológico: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>								
Incidente con lesión	Dispone de parte de lesiones: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>								
	Tipo de lesión								
Parte del cuerpo	Haga clic aquí para escribir texto.								
Gravedad de la lesión	Haga clic aquí para escribir texto.								
Días de baja laboral en I.T. (0 si cursa sin baja)	<table border="1"> <tr> <td>Inicio</td> <td>Fin</td> </tr> <tr> <td>Fecha inicio</td> <td>Fecha fin</td> </tr> <tr> <td>Fecha inicio</td> <td>Fecha fin</td> </tr> </table>	Inicio	Fin	Fecha inicio	Fecha fin	Fecha inicio	Fecha fin		
Inicio	Fin								
Fecha inicio	Fecha fin								
Fecha inicio	Fecha fin								
Asistencia recibida	Haga clic aquí para escribir texto.								

ANEXO IX



MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARIA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Numero
número

ANEXO III. FICHA DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES.

A. ANTECEDENTES O DETONANTES			
Antecedentes genéricos	Haga clic aquí para escribir texto.		
Antecedentes concretos	Haga clic aquí para escribir texto.		
Observaciones Haga clic aquí para escribir texto.			
B. CAUSAS			
Causas	Haga clic aquí para escribir texto.		
Observaciones Haga clic aquí para escribir texto.			
C. MEDIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD			
Medios materiales	Haga clic aquí para escribir texto.		
Normativa interna	Haga clic aquí para escribir texto.		
Observaciones Haga clic aquí para escribir texto.			
D. ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR			
Actividad que realizaba	Haga clic aquí para escribir texto.		
¿En la actividad realizada se necesitan equipos de protección?		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
¿Disponía el trabajador de los equipos de protección?		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
¿Utilizó el trabajador los equipos de protección?		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
¿Se hizo un uso adecuado de los equipos de protección?		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Descripción de la actuación del trabajador Haga clic aquí para escribir texto.			
¿Existe un procedimiento o protocolo que regule la actuación de los funcionarios en este tipo de incidentes?		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
¿Estaba el trabajador informado de su existencia?		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
¿Actuó el trabajador conforme a procedimiento o protocolo?		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
E. ACTUACIONES DE APOYO			
Fecha inicio	Fecha finalización	Tipo de actuación	Observaciones
fecha inicio	fecha final	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.

ANEXO X



MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

ANEXO IV.

POSIBLES CAUSAS	
Relacionadas con la organización	
<input type="checkbox"/>	Falta de procedimientos adecuados
<input type="checkbox"/>	Falta de medios de protección y seguridad adecuados
<input type="checkbox"/>	Falta de información sobre el perfil del interno
<input type="checkbox"/>	Falta de personal en la resolución del incidente
<input type="checkbox"/>	Falta de formación del personal
<input type="checkbox"/>	Rotaciones sistemáticas de servicios
<input type="checkbox"/>	Inadecuada separación interior de internos
<input type="checkbox"/>	Falta de información sobre el procedimiento de actuación
<input type="checkbox"/>	Mala ubicación de los medios de protección y coercitivos
<input type="checkbox"/>	Inadecuada organización de los trabajadores
<input type="checkbox"/>	Otras relacionadas con la organización
Relacionadas con el trabajador	
<input type="checkbox"/>	No utilización de procedimientos establecidos
<input type="checkbox"/>	No utilización de medios de prevención disponibles
<input type="checkbox"/>	No presencia de funcionarios en el lugar del incidente
<input type="checkbox"/>	Actuación inadecuada en la interacción con el interno: -Desconocimiento de las características del interno
<input type="checkbox"/>	Actuación inadecuada en la interacción con el interno: -Inadecuada valoración de la situación de riesgo
<input type="checkbox"/>	No disponer de información sobre el interno
<input type="checkbox"/>	No tener conciencia de la situación de riesgo
<input type="checkbox"/>	Otras relacionadas con el trabajador
Relacionadas con el interno	
<input type="checkbox"/>	Reacción explosiva e imprevisible
<input type="checkbox"/>	Reacción relacionada con patologías mentales
<input type="checkbox"/>	Reacción relacionada con consumo de tóxicos
<input type="checkbox"/>	Otras relacionadas con el interno



MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARIA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

MEDIDAS PREVENTIVAS	
<input type="checkbox"/>	Información al trabajador sobre el procedimiento de actuación
<input type="checkbox"/>	Elaboración de un procedimiento de actuación específico
<input type="checkbox"/>	Dotación adecuada de medios de protección y de seguridad.
<input type="checkbox"/>	Facilitar información suficiente sobre el perfil del interno
<input type="checkbox"/>	Adecuada organización del servicio para resolución del incidente
<input type="checkbox"/>	Revisión de criterios y métodos de separación interior
<input type="checkbox"/>	Utilización y disposición adecuada de medios de protección y medios coercitivos
<input type="checkbox"/>	Adecuada distribución de servicios.
<input type="checkbox"/>	Presencia del Jefe de Servicios ante determinadas situaciones regimentales
<input type="checkbox"/>	Adecuación de las medidas de prevención y cautela.
<input type="checkbox"/>	Adecuada transmisión de información entre profesionales
<input type="checkbox"/>	Plan de formación específico